

<b>TRAZABILIDAD</b>	Antecedente 2017-GC-012 ANT IP-2017-00426
<b>PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>	PRF-2019-00072
<b>CUN SIREF</b>	AN-80763-2017-29589 AC-80763-2018-26284
<b>ENTIDAD AFECTADA:</b>	DISTRITO DE BUENAVENTURA Nit. No. 890.399.045-3
<b>CUANTÍA DE DAÑO</b>	SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$ 78.585.000) SIN INDEXAR
<b>PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES</b>	<p>CONSTRUCTORA CRP identificada con el Nit. No. 890.313.269, representada legalmente por CESAR RUIZ PEREA, en su calidad de Contratista en el Contrato No. 133061 de 2013.</p> <p>JULIO CESAR DIAZ CUERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.489.601, en su calidad de Secretario de Infraestructura del Distrito de Buenaventura para la época de los hechos.</p> <p>UNIÓN TEMPORAL BOULEVARD DE BUENAVENTURA, identificada con el Nit. 900.748.452-1, representada legalmente por HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula No. 16.715.628, Interventor del Contrato de Obra No. 133041 de 2013, mediante el Contrato de Interventoría No. 141226 del 11 de julio de 2014, y sus consorciados:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Diconsultoría S.A., identificada con el Nit. 800.003.776-3, representada legalmente por HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.715.628.</li><li>Carlos Alfredo Valencia Pardo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.691.511, Carlos Alfredo Valencia Pardo S.A.S, identificado con el Nit. 901.420.994-6.</li></ol> <p>BARTOLO VALENCIA RAMOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.469.636 de Buenaventura, representante legal del Distrito de Buenaventura, ordenador del gasto, al suscribir Contrato de Obra No. 133041 del 16 de diciembre de 2013, en calidad del Contratante para la época de los hechos.</p>
<b>TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES</b>	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, identificada con el Nit. No. 860.524.654-6, Póliza de Cumplimiento de Entidades Estatales No. 430-47-994000022361, Anexo 3, Amparos: Cumplimiento

	<p>desde el 16 de enero de 2014 hasta el 22 de junio de 2015, Valor asegurado: \$ 976.276.819,30; Anticipo desde el 16 de enero de 2014 hasta el 22 de junio de 2015, Valor asegurado: \$1.952.553.638,60 y Estabilidad y calidad de la obra desde el 16 de enero de 2014, hasta el 16 de enero de 2019, Valor asegurado: \$1.952.553.638,60; pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización desde el 16 de enero de 2014 al 22 de febrero de 2018, valor asegurado: \$1.952.000.000.</p> <p>LA PREVISORA SEGUROS, identificada con el Nit. No. 860.002.400-2, al expedir las Pólizas Globales Oficiales:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• No. 3000010, expedida el 25 de enero de 2013, con vigencia desde el 23 de enero de 2013 hasta el 23 de enero de 2014, tomador, afianzado y asegurado es el Municipio de Buenaventura, por valor asegurado de \$ 100.000.000, amparo Cobertura Global de Manejo. Renovación, expedida el 27 de enero de 2015, con vigencia desde el 23 de enero de 2015 hasta el 23 de enero de 2016, tomador, afianzado y asegurado es el Municipio de Buenaventura, por valor asegurado de \$ 100.000.000, amparo Cobertura Global de Manejo.</li><li>• No. 3000003, expedida el 29 de octubre de 2013, con vigencia desde el 24 de octubre de 2013 hasta el 24 de octubre de 2014, tomador, afianzado y asegurado es el Municipio de Buenaventura, por valor asegurado de \$100.000.000, amparo Cobertura Global de Manejo.</li><li>• No. 931653, expedida el 08 de enero de 2014, con vigencia desde el 23 de enero de 2014 hasta el 23 de enero de 2015, tomador, afianzado y asegurado es el Municipio de Buenaventura, por valor asegurado de \$ 100.000.000, amparo Cobertura Global de Manejo.</li></ul>
<b>DIRECTIVO PONENTE</b>	<b>MARYORY PAREDES RUIZ</b>

**ASUNTO**

Habiéndose agotado la actuación prevista de la Ley 610 de 2000 y estando en la oportunidad para proferir la decisión señalada en el artículo 46 ibidem, procede los suscritos Directivos Colegiados de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca de la Contraloría General de la República, conforme al artículo 48 a proferir Auto de Imputación de Responsabilidad Fiscal dentro del trámite del

presente Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, el cual se adelanta por el manejo irregular de recursos públicos en el Distrito Especial e Buenaventura.

ANTECEDENTE

El Antecedente No. 2017-GC-0012 (CUN AN-80763-2017-29589) es el resultado de la Auditoría practicada al Sistema General de Regalías del Municipio de Buenaventura para las vigencias 2012-2015, donde se evaluó el Contrato No. 133041 de 2013, celebrado entre el Municipio de Buenaventura y la firma Constructora CRP cuyo objeto es *"REHABILITACION Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO BOULEVARD DE BUENAVENTURA"*, por un monto inicial de \$9.762.768.193.

HALLAZGO H8. A8. D7. F2 CALIDAD DE OBRA. CONTRATO 133041 del 2013. Reporte del Hallazgo el 30 de septiembre de 2016; remitido mediante oficio No. 2017IE0000290 del 03 de enero de 2017, el Contralor Delegado Intersectorial para el Sistema General de Regalías remitió a la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca, el Hallazgo Fiscal No. 08 con incidencia fiscal por *"En la visita realizada a la obra se observó que la ejecución del ítem No 4. 9 BOLARDO TIPO PORTUARIO, cancelado en el acta final de obra del 19 de diciembre de 2015, se evidenció que dicho ítem fue ejecutado sin el cumplimiento de calidad esperada, presentando un deterioro prematuro derivado de deficiencias presentadas en el proceso constructivo evidenciado en resanes efectuados sobre la parte superior del bolarde, presentando agrietamiento que ocasiona filtración de agua, exponiendo su refuerzo a la corrosión de los materiales que componen la unidad del ítem y, disminuyendo su vida útil. " "El detrimento patrimonial por deficiente calidad encontrada en las obras que se deriva de un incumplimiento de los requerimientos técnicos especificados en los estudios y diseños presentados ante el OCAD del Distrito de Buenaventura para la aprobación del proyecto, corresponde al valor total del ítem analizado que asciende a \$233.740.000, incluye AIU En consecuencia, de lo expuesto se configura una observación administrativa con una presunta incidencia disciplinaria y fiscal."*

Se adelanto Indagación Preliminar No. ANT\_IP-2017-00426, donde se practicó Informe Técnico que determino *"...Teniendo en cuenta que no todos los bolardos presentan deterioro, se efectuó un inventario de los bolardos que presentan señales de deterioro y que el mismo no es causado por choques de vehículos, identificados porque presentan fisuras en las caras del bolarde y el mismo no está desplomado, que es lo primero que sucede cuando se choca un vehículo contra este tipo de estructuras. El inventario de los bolados con señales de deterioro asciende a 73 bolardos, teniendo en cuenta que el precio unitario de cada bolarde, incluido el AIU es de \$403.000, se tendría un presunto detrimento de \$29.419.000. ..."*

COMPETENCIA

La competencia institucional para conocer y adelantar lo pertinente en estas diligencias es la Ordinaria, prevista en los artículos 267 y 268 numeral 5 de la Constitución Política de Colombia.

El artículo 2 del Decreto 403 del 2020 señala que en sus definiciones que sujeto de vigilancia y control fiscal son *"(...) los órganos que integran las ramas del poder público, los órganos autónomos e independientes, los de control y electorales, los organismos creados por la Constitución Política y la ley que tienen régimen especial, el*

*Banco de la República, y las demás entidades públicas en todos los niveles administrativos, los particulares, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que a cualquier título recauden, administren, manejen, dispongan o inviertan fondos, recursos del Estado y/o bienes o recursos públicos en lo relacionado con estos.” (Subrayado extra texto)*

La Ley 2056 del 2020 por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías, en sus artículo 164 y 183 establece quienes ejercerán la vigilancia, control fiscal y disciplinario respecto de los recursos del Sistema General de Regalías:

**Artículo 164. El Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC),** es el conjunto de actores, normas, procedimientos y actividades que tienen como finalidad velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos del Sistema General de Regalías. El Sistema desarrollará funciones de vigilancia y control de carácter administrativo, en ejercicio de la atribución estatal de dirigir en forma general la economía nacional y de la propiedad del Estado sobre los recursos naturales no renovables, con enfoque preventivo, sin perjuicio de las funciones que correspondan a las autoridades competentes en materia de inspección, vigilancia y control fiscal o disciplinario; y de investigación, acusación y juzgamiento de carácter penal.

*El seguimiento, evaluación y control administrativo consiste en la recolección, consolidación, análisis y verificación de la información correspondiente a la aprobación y ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías, así como en la verificación periódica y selectiva en forma directa del avance y resultados de las inversiones financiadas con estos recursos, para estos efectos se podrán practicar visitas de inspección.*

*Incluye también, el reporte a órganos de control de las situaciones irregulares identificadas en el manejo de estos recursos y la adopción de medidas administrativas tendientes a la protección de los recursos del Sistema General de Regalías y a la ejecución de los proyectos de inversión financiados con estos, en términos de eficacia, eficiencia, calidad, operación, sostenibilidad y pertinencia de las inversiones y su aporte al desarrollo local, para lo cual se adelantarán las actuaciones administrativas previstas en el procedimiento que para el efecto se establece en la presente ley.*

**Parágrafo.** *El control administrativo del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control, el control disciplinario de la Procuraduría General de la Nación y el control fiscal de la Contraloría General de la República, actuarán de manera coordinada dentro del ámbito de sus competencias”*

**Artículo 183. Vigilancia y Control Fiscal y Disciplinario.** *En desarrollo de sus funciones constitucionales y legales, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación ejercerán el control fiscal y disciplinario, respectivamente, sobre los recursos del Sistema General de Regalías.*

Queda establecida entonces la competencia de la Contraloría General de la República para conocer el presente Proceso de Responsabilidad Fiscal, pasaremos ahora a evaluar la competencia de esta Gerencia Departamental Colegiada:

Para establecer la competencia de esta Gerencia Departamental se debe evaluar lo preceptuado por el artículo 3 de la Resolución REG-OGZ-0748-2020 del 26 de febrero de 2020, proferida por la Contraloría General de la República en el cual se dispone lo siguiente: “Las dependencias competentes para conocer, tramitar y decidir el proceso de responsabilidad fiscal que corresponde adelantar a la

Contraloría General de la República, de acuerdo con los factores de competencia que más adelante se enuncian, son las siguientes:

(...) 7. Gerencias Departamentales Colegiadas.

Posteriormente el artículo 12 de la misma resolución dispone: “Para la determinación de la competencia para el trámite de la indagación preliminar y el proceso de responsabilidad al interior de la Contraloría General de la República, se tendrán en cuenta los siguientes factores:

1. **Factor Territorial:** Lugar en donde se ejecutaron o debieron ejecutar los recursos públicos. Para los efectos de la presente resolución, el factor territorial se refiere a la ejecución presupuestal de los recursos públicos.”

Finalmente, el artículo 23 de la precitada normatividad señala: “Las Gerencias Departamentales Colegiadas conocerán de los siguientes asuntos:

4. En primera o única instancia de los procesos de responsabilidad fiscal que deban tramitarse respecto de los recursos del orden nacional que se hayan ejecutado o debieron ejecutarse en el territorio del respectivo departamento por las entidades del orden territorial y descentralizadas por servicios.” (Subrayado extra-texto).

Para el caso concreto se trata de un Hallazgo fiscal detectado en el Distrito de Buenaventura - Valle del Cauca, Secretaria de Infraestructura Vial, recursos FNR, por lo que se trata de recursos del orden nacional, sujetos de control de la Contraloría General de la República, y que fueron ejecutados a través de dicho Ente Territorial del Valle del Cauca, por lo que esta Gerencia Departamental Colegiada es competente para conocer del presente caso.

HECHOS

Los hechos objeto de reproche fiscal se circunscriben en lo siguiente:

En el Contrato de Obra No. 133041 de 2013, objeto: REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO: BOULEVARD BUENAVENTURA, por un monto inicial de \$9.762.768.193, y un contrato adicional de \$1.425.896.818 en la visita realizada a la obra se observó que la ejecución del ítem No 4.9 BOLARDO TIPO PORTUARIO, cancelado en el acta final de obra del 19 de diciembre de 2015, se evidenció que dicho ítem fue ejecutado sin el cumplimiento de calidad esperada, presentando un deterioro prematuro derivado de deficiencias presentadas en el proceso constructivo evidenciado en resanes efectuados sobre la parte superior del bolaro, presentando agrietamiento que ocasiona filtración de agua, exponiendo su refuerzo a la corrosión de los materiales que componen la unidad del ítem y, disminuyendo su vida útil.

"El detrimento patrimonial por deficiente calidad encontrada en las obras que se deriva de un incumplimiento de los requerimientos técnicos especificados en los estudios y diseños presentados ante el OCAD del Distrito de Buenaventura para la aprobación del proyecto, corresponde al valor total del ítem analizado que asciende a \$233.740.000, incluye AIU. En consecuencia, de lo expuesto se configura una observación administrativa con una presunta incidencia disciplinaria y fiscal."

Teniendo en cuenta lo anterior se apertura la Indagación Preliminar ANT\_IP-2017-00426, en donde se decreta la práctica de Informe técnico, con el fin de determinar con claridad la existencia del daño patrimonial y su cuantificación.

De conformidad con lo anterior se radicó el Informe técnico con No. 20181E0094333 el 2 de diciembre de 2018<sup>1</sup>, en donde se concluyó un detrimento patrimonial por deficiente calidad encontrada en las obras que se derivan de un incumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos en los estudios y diseños presentados ante el OCAD<sup>2</sup> del Distrito de Buenaventura para la aprobación del Proyecto.

De acuerdo con el resultado de la Visita y con lo establecido en el Informe técnico no todos los bolardos presentan deterioro, por lo que se efectuó un inventario de los bolardos que presentan estas señales de deterioro e incumplimiento de los requerimientos técnicos y se contabilizaron 73 bolardos. Una vez evaluado el precio unitario de cada bolarado, incluido el AIU, contemplado en los anexos que hacen parte integral del Contrato No. 133041 de 2013, este tiene un valor de \$ 403.000. Por tal motivo el presunto detrimento patrimonial se calcula en **VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$29.419.000).**

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Como fundamentos de derecho, se invocan las siguientes normas:

- **Artículos 267 y 268** numeral 5 de la Constitución Política de Colombia.
- **Ley 610 de 2000**, a través de la cual se fija el trámite de los Procesos de responsabilidad Fiscal.
- **Resolución Organizacional REG-OGZ-0748-2020 del 26 de febrero de 2020** por la cual se determina la competencia para el conocimiento y trámite de la acción de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo en la Contraloría General de la República.
- **Decreto 405 del 2020**, por el cual se modifica la estructura orgánica y funcional de la Contraloría General de la República.
- **Ley 1474 de 2011**, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Subsección II Artículos 106 al 109 y Subsección III del artículo 110 al 120.
- **Ley 80 de 1993**, Estatuto de Contratación Estatal, artículos 3, 4, numerales 1, 2, 4 y 5, 5 numerales 1, 2 y 4, que contemplan los fines de la contratación estatal, la colaboración de los contratistas en el logro de estos fines, y la función social que cumplen, la cual implica obligaciones, los derechos y obligaciones de las Entidades Estatales y de los contratistas, entre las que se encuentran la ejecución idónea de la contratación, la exigencia de calidad de los bienes y servicios.

**“Artículo 26. Del principio de responsabilidad.** En virtud de este principio:

- *Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.*

<sup>1</sup> A folios 139-143

<sup>2</sup> Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), encargado de evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar los programas y proyectos que serán financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

- *Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. (...).*
- **Decreto Ley 019 de 2012, Artículo 60, modificado por el Artículo 217,** sobre la liquidación de los contratos: *“(...) También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y las transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. (...).*”
- **Ley 1150 de 2007** y demás normatividad reglamentaria, de manera especial el ultimo inciso del Artículo 11: *“(...) Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.*”
- **Ley 42 de 1993** que establece la organización del Control Fiscal Financiero y organismos que lo ejercen, disponiendo en su artículo 49 que la Contraloría General de la Republica vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.
- **Ley 2056 de 2020,** por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías.

**NATURALEZA JURIDICA DE LA ENTIDAD AFECTADA**

Nombre de la Entidad:	BUENAVENTURA, Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico VALLE DEL CAUCA
Número de Identificación Tributaria:	890.399.045-
Naturaleza Jurídica:	Ente Territorial de orden distrital
Dirección:	Calle 2 Carrera 3 Edificio CAD

**PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES**

- En el Auto No. 618 del 30 de septiembre de 2019, de apertura, fueron vinculados:
1. **CONSTRUCTORA CRP**, identificada con el Nit.: 890.313.269, representada legalmente por **CESAR RUIZ PEREA**, al suscribir como Contratista el Contrato de Obra No. 133041 del 16 de diciembre de 2013, en calidad de Contratista.
  2. **JULIO CESAR DIAZ CUERO**, quien en vida se identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.489.601, Secretario de Infraestructura del Distrito de Buenaventura, con funciones de supervisión y seguimiento del contrato 133041 del 16 de diciembre de 2013.
  3. **UNIÓN TEMPORAL BOULEVARD DE BUENAVENTURA**, identificada con el Nit.: 900.748.452-1, representada legalmente por **HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ**, identificado con cédula No. 16.715.628, Interventor del Contrato de Obra No. 133041 de 2013, mediante Contrato de Interventoría No. 141226 del 11 de julio de 2014, integrada por:
    - a. Diconsultoría S.A., identificada con el Nit. No. 800.003.776-3, y
    - b. Carlos Alfredo Valencia Pardo S.A.S, identificado con el Nit. No. 901.420.994-6

En Auto No. 739 del 09 de noviembre de 2023, se vincula a:

4. **BARTOLO VALENCIA RAMOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.469.636 de Buenaventura, en su calidad de Alcalde Municipal para la ocurrencia de los hechos, al suscribir como Contratista el Contrato de Obra No. 133041 del 16 de diciembre de 2013, en calidad de Contratante.

**TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES**

De conformidad con lo establecido por el artículo 44 de la Ley 610 del 15 de agosto de 2000, se vinculó en calidad de terceros civilmente responsables:

Auto No. 618 del 30 de septiembre de 2019, se vincula:

1. **COMPAÑÍA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.** Nit.: 860.514.654-6, Póliza de Cumplimiento de Entidades Estatales No. 430-74-9940000022361, amparos: *"Cumplimiento desde el 16 de enero de 2014 hasta el 22 de junio de 2015, Valor asegurado. \$ 976.276.819,30; Anticipo desde el 16 de enero de 2014 hasta el 22 de junio de 2015, Valor asegurado. \$1.952.553.638,60 y Estabilidad y calidad de la obra desde el 16 de enero de 2014, hasta el 16 de enero de 2019 Valor asegurado \$ 1.952.553.638,60. Con asegurado y/o beneficiario el Distrito de Buenaventura"*. Comunicación de vinculación mediante radicado No. 2019EE0124868 del 02 de octubre de 2019.
2. **COMPAÑÍA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A.**, identificada con el Nit.: 860.002.400-2, en virtud de la póliza global de manejo sector Oficial:
- **No. 30000010**, vigente desde el 29 de octubre de 2013, el 23 de octubre de 2013 hasta el 23 de octubre de 2014, cuyo tomador, afianzado y asegurado es el MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, asegurado de \$100.000.000, amparo Cobertura Global de Manejo.
  - **No. 931653** expedida el 08 de enero de 2014, con vigencia desde el 23 de enero de 2014 hasta el 23 de enero de 2015, cuyo tomador, afianzado y asegurado es el MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, por valor asegurado de \$ 100.000.000, amparo Cobertura Global de Manejo.
  - **No. 30000010** (renovación) expedida el 27 de enero de 2015, con vigencia desde el 23 de enero de 2015 hasta el 23 de enero de 2016, expedida el 29 de octubre de 2013, cuyo tomador, afianzado y asegurado es el MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, por valor asegurado de \$ 100.000.000, amparo Cobertura Global de Manejo.

Comunicación de vinculación oficio No. 2019EE0124853 del 02 de octubre de 2019.

En Auto No. 739 del 09 de noviembre de 2023, se vincula a:

3. **COMPAÑÍA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A.**, identificada con el Nit. 860.002.400-2, en virtud de la Póliza Global Sector Oficial No. 3000003, expedida el 29 de octubre de 2013, con vigencia desde el 24 de octubre de 2013 hasta el 24 de octubre de 2014, cuyo tomador, afianzado y asegurado es el MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, por valor asegurado de \$100.000.000, amparo Cobertura Global de Manejo, conforme a lo previsto en la parte considerativa de la presenta providencia y lo hechos descritos en el Auto No.422 del 23 de agosto 2018, por medio del cual los Directivos Colegiados de esta Gerencia Departamental, ordeno la apertura del presente



Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal. Mediante comunicación 2023EE0212713 de fecha 30 de noviembre de 2023, se da respuesta a la solicitud de copia del apoderado de confianza de la Compañía Aseguradora Gustavo Alberto Herrera Ávila.

ACTUACIONES PROCESALES

No. Y TIPO DE PROVIDENCIA	NOTIFICACIÓN / COMUNICACION
AUTO No. 618 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 APERTURA	<ul style="list-style-type: none"><li>JULIO CESAR DIAZ CUERO, NOTIFICACION REALIZADA ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO EL 10 DE ENERO DE 2020, NOTIFICACION PERSONAL EM 2023EE0206681 JULIO CESAR DIAZ PRF-2019-00072 Y 20231110_AUTORIZACION APODERADO H DETERMINADOS NT ELECTRONICA_PRF-2019-00072, DENOMINADO "20200211_DEVOLUCION_DILIGENCIAS_NOTIFICACION_20 20IE0012894 y 20231218_DILIGENCIAS DE NOTIFICACION PERSONAL_2023IE0132537_PRF-2019-00072, trámite SIREF No. 20 y 88" Ante el fallecimiento del señor Diaz Cuero y en representación de los intereses de los hijos menores del Causante, "20240301_AUTO No 125 MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA CURADOR AD LITEM PARA HEREDEROS DEL SR JULIO CESAR DIAZ CUERO_PRF-2019-00072 y 20240411_ACTA DE POSESION CURADOR_PRF-2019-00072_6862808, Trámite SIREF No. 92 y 117"</li><li>CONSTRUCTORA CRP SAS, NOTIFICACION PERSONAL DEL 15 DE OCTUBRE DE 2019 ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL No. 145-2019, ACTUACIÓN VISIBLE EN EL ARCHIVO DENOMINADO "20200211_DEVOLUCION_DILIGENCIAS_NOTIFICACION_20 20IE0012894 y 20231218_DILIGENCIAS DE NOTIFICACION PERSONAL_2023IE0132537_PRF-2019-00072, Trámite SIREF No. 20 y 88"</li><li>UNION TEMPORAL BOULEVARD DE BUENAVENTURA, NOTIFICACION PERSONAL DEL 18/10/2019 ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL No. 155-2019 (HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ) DENOMINADO "20200211_DEVOLUCION_DILIGENCIAS_NOTIFICACION_20 20IE0012894 y 20231218_DILIGENCIAS DE NOTIFICACION PERSONAL_2023IE0132537_PRF-2019-00072, Trámite SIREF No. 20 y 88"</li><li>DICONSULTORÍA S.A., NOTIFICACION PERSONAL DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 5- NP EM 2023EE0206584 DICONSULTORIA PRF-2019-00072 DENOMINADO "20231218_DILIGENCIAS DE NOTIFICACION PERSONAL_2023IE0132537_PRF-2019-00072, Trámite SIREF No. 88"</li><li>CARLOS ALFREDO VALENCIA PARDO S.A.S., NOTIFICACION PERSONAL DEL NP EM 2023EE0206726 CARLOS ALFREDO VALENCIA PRF-2019-00072, archivo DENOMINADO "20231218_DILIGENCIAS DE NOTIFICACION PERSONAL_2023IE0132537_PRF-2019-00072, Trámite SIREF No. 88" Se designó apoderado de oficio al estudiante Laura Daniela Castellanos, archivo DENOMINADO "20240522_DILIGENCIA DE POSESION DEL APODERADO DE OFICIO Laura Daniela</li></ul>

No. Y TIPO DE PROVIDENCIA	NOTIFICACIÓN / COMUNICACION
	<p><i>Castellanos Nino PRF-2019-00072 DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, Trámite SIREF No. 151"</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>BARTOLO VALENCIA RAMOS, NOTIFICACION AVISO UC 2023EE0213437, ACTUACIÓN VISIBLE EN EL ARCHIVO DENOMINADO "20231218_DILIGENCIAS DE NOTIFICACION PERSONAL_2023IE0132537_PRF-2019-00072, Trámite SIREF No. 88"</li></ul> <p>Se designó apoderado de oficio al estudiante Carlos Arturo Muñoz Villegas, archivo DENOMINADO "20240522_ACTA DE POSESION APODERADO DE OFICIO CARLOS ARTURO MUÑOZ_PRF-2019-00072_6960166, Trámite SIREF No. 150"</p> <p>Comunicación apertura PRF a las Compañías aseguradoras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Aseguradora Solidaria de Colombia Nit.: 860.524.654-6 comunicada mediante oficios No. 2019EE0124868 02 DE OCTUBRE DE 2019, Trámite SIREF No. 13"</li><li>Aseguradora PREVISORA SEGUROS Nit.: 860.002.400-2 comunicada mediante oficios No. 2019EE0124853 02 DE OCTUBRE DE 2019, Trámite SIREF No. 14"</li></ul>
VERSIONES LIBRES	<ul style="list-style-type: none"><li>JULIO CESAR DIAZ CUERO, ante el fallecimiento del señor Díaz Cuero y en representación de los intereses de los hijos menores del Causante, "20240301_AUTO No 125 MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA CURADOR AD LITEM PARA HEREDEROS DEL SR JULIO CESAR DIAZ CUERO_PRF-2019-00072 y 20240411_ACTA DE POSESION CURADOR_PRF-2019-00072_6862808", Trámite SIREF No. 92 y 117</li><li>CONSTRUCTORA CRP, VERSION LIBRE EN ESCRITO DEL 12 DE ABRIL DE 2024. ACTUACIÓN VISIBLE EN EL ARCHIVO DENOMINADO "20240412_VERSION LIBRE CONSTRUCTORA CRP_PRF-2019-00072_2024ER0075258", Trámite SIREF No. 119</li><li>UNION TEMPORAL BOULEVARD DE BUENAVENTURA, no se presentó a la citación de diligencia; se nombró apoderado de oficio ACTUACIÓN VISIBLE EN EL ARCHIVO DENOMINADO "20240522_Acta de posesión firmada apoderado de oficio UT Boulevard", Trámite SIREF No. 149; rindió versión libre en escrito de fecha 27 DE JUNIO DE 2024; ACTUACION VISIBLE EN EL ARCHIVO DIGITAL DENOMINADO "20240627_VERSION LIBRE REP LEGAL UT BOULEVARD DE BUENAVENTURA_PRF-2019-00072_2024ER0139038", Trámite SIREF No. 164</li><li>DICONSULTORÍA S.A, no rindió versión libre; se nombró apoderado de oficio al estudiante Laura Daniela Castellanos, ACTUACIÓN VISIBLE EN EL ARCHIVO DENOMINADO "20240522_DILIGENCIA DE POSESION DEL APODERADO DE OFICIO Laura Daniela Castellanos Nino PRF-2019-00072 DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA", Trámite SIREF No. 151 aporoto poder a los apoderados de confianza archivo denominado "20240530_AUTO No 314 QUE RECONOCE PERSONERIA APODERADO DICONSLUTORIA_PRF-2019-00072", Trámite SIREF No. 157</li><li>CARLOS ALFREDO VALENCIA PARDO S.A.S., no se presentó a la citación de diligencia; se nombró apoderado de oficio al estudiante Laura Daniela Castellanos, ACTUACIÓN VISIBLE EN EL ARCHIVO DENOMINADO "20240522_DILIGENCIA DE POSESION DEL APODERADO DE OFICIO Laura Daniela Castellanos Nino PRF-2019-00072 DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA", Trámite SIREF No. 151</li></ul>

No. Y TIPO DE PROVIDENCIA	NOTIFICACIÓN / COMUNICACION
	<ul style="list-style-type: none"><li>BARTOLO VALENCIA RAMOS, no se presentó a la citación de diligencia; se nombró apoderado de oficio ACTUACIÓN VISIBLE EN EL ARCHIVO DENOMINADO “20240522_DILIGENCIA DE POSESION DEL APODERADO DE OFICIO ESTUDIANTE CARLOS ARTURO MUÑOZ VILLEGAS_PRF-2019-00072 DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA”, Trámite SIREF No. 150</li></ul>
RESOLUCION EJECUTIVA 063 DE 2020 SUSPENDE TERMINOS DENTRO DE LAS IP Y PRF, ENTRE OTRAS DEL 16/03/2020	PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA CGR VISIBLE A folios 240-241 trámite SIREF 23
RESOLUCION EJECUTIVA 064 DE 2020 SUSPENDE TERMINOS DENTRO DE LAS IP Y PRF, ENTRE OTRAS DEL 30/03/2020	PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA CGR VISIBLE A folios 242-244 trámite SIREF 24
RESOLUCION EJECUTIVA 070 DE 2020 SUSPENDE TERMINOS DENTRO DE LAS IP Y PRF, ENTRE OTRAS DEL 01/07/2020	PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA CGR VISIBLE A folios 245-247 trámite SIREF 25
AUTO No. 229 DEL 14 DE JULIO DE 2020 REANUDAN LOS TERMINOS DENTRO DE LAS IP Y PRF, ENTRE OTRAS	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO 047-2020 DEL 15 DE JULIO DE 2020, VISIBLE A FOLIO 248-255Trámite SIREF 26
RESOLUCION EJECUTIVA No. REG-EJE-773-2020 SUSPENDE TERMINOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 HASTA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES GRUPOS INTERNOS Y OTROS ASUNTOS	PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA CGR (No suspende términos de caducidad ni prescripción)
AUTO No. 009 POR MEDIO DEL CUAL SE REANUDA TERMINOS 20 DE ENERO DE 2021	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 010 DEL 22 DE ENERO DE 2021, VISIBLE A Trámite SIREF 39
AUTO No. 221 POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNA APOYO TECNICO Y APODERADOS DE OFICIO 05 DE ABRIL DE 2021	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 051 DEL 07 DE ABRIL DE 2021, VISIBLE A Trámite SIREF 48

No. Y TIPO DE PROVIDENCIA	NOTIFICACIÓN / COMUNICACION
INFORME TECNICO 2021IE0088855 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2021	TRASLADO DEL INFORME TECNICO No. 104-2021 de 13 DE DICIEMBRE DE 2021, VISIBLE A Trámite SIREF 61
AUTO No. 725 POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA EL TRASLADO DE UNA PRUEBA 25 DE OCTUBRE DE 2022	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 178 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2022, VISIBLE A Trámite SIREF 66 AL 68
AUTO No. 739 POR MEDIO DEL CUAL SE EMPLAZAN HEREDEROS 28 DE OCTUBRE DE 2022	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 181 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022, VISIBLE A Trámite SIREF 69
RESOLUCION EJECUTIVA No. REG-EJE-0120-2023 SUSPENDE TERMINOS DEL 02 DE ENERO DE 2023 HASTA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES GRUPOS INTERNOS Y OTROS ASUNTOS	PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA CGR (No suspende términos de caducidad ni prescripción)
AUTO No. 496 POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE SOBRE LA SUCESION PROCESAL 25 DE JULIO DE 2023	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 141 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, VISIBLE A Trámite SIREF 74
AUTO No. 497 POR MEDIO DEL CUAL SE NOMBRA CURADOR AD LITEM 25 DE JULIO DE 2023	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 141 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, VISIBLE A Trámite SIREF 74 ACTA DE POSESION CURADOR DEL 11 DE ABRIL DE 2024, VISIBLE A Trámite SIREF 118
AUTO No. 739 POR MEDIO DEL CUAL SE VINCULA UN PRESUNTO Y UN TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE Y SE DECRETA PRUEBAS 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 188-2023 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2023, VISIBLE A Trámite SIREF 83  DILIGENCIAS DE NOTIFICACION PERSONAL_2023IE0132537_18 de diciembre de 2023_PRF-2019-00072_VISIBLE A Trámite SIREF 88
RENUNCIA CURADORA AD LITEM_2024ER0022 531 07 DE FEBRERO DE 2024	VISIBLE A Trámite SIREF 89
AUTO No. 125 POR MEDIO DEL CUAL SE NOMBRA	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 038-2024 DEL 04 DE MARZO DE 2024, VISIBLE A Trámite SIREF 95

No. Y TIPO DE PROVIDENCIA	NOTIFICACIÓN / COMUNICACION
CURADOR AD LITEM 01 DE MARZO DE 2024	
AUTO No. 148 POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA FECHA Y HORA PARA ESCUCHAR EN DILIGENCIAS DE EXPOSICION LIBRE Y ESPONTANEA A LOS PRESUNTOS 15 DE MARZO DE 2024	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 046-2024 DEL 18 DE MARZO DE 2024, VISIBLE A Trámite SIREF 100
AUTO No. 203 POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA FECHA Y HORA PARA ESCUCHAR EN DILIGENCIAS DE EXPOSICION LIBRE Y ESPONTANEA A LOS PRESUNTOS 11 DE ABRIL DE 2024	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 058-2024 DEL 15 DE ABRIL DE 2024, VISIBLE A Trámite SIREF 117
AUTO No. 239 POR MEDIO DEL CUAL SE QUE ORDENA LA ACLARACION DEL INFORME TECNICO 03 DE MAYO DE 2024	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 070-2024 DEL 06 DE MAYO DE 2024, VISIBLE A Trámite SIREF 139
AUTO No. 240 POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRACTICA DE PRUEBA 03 DE MAYO DE 2024	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 070-2024 DEL 06 DE MAYO DE 2024, VISIBLE A Trámite SIREF 139
AUTO No. 278 POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNA APODERADO DE OFICIO 20 DE MAYO DE 2024	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 081-2024 DEL 22 DE MAYO DE 2024, VISIBLE A Trámite SIREF 154
AUTO No. 314 DEL 30 DE MAYO DE 2024 MEDIANTE EL CUAL SE RECONOCE PERSONERIA JURIDICA	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 088-2024 DEL 04 DE JUNIO DE 2024, VISIBLE A Trámite SIREF 163
AUTO No. 447 DEL 29 DE JULIO DE 2024 MEDIANTE EL CUAL SE PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACLARACIONES Y	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 124-2024 DEL 30 DE JULIO DE 2024, VISIBLE A Trámite SIREF 176  FIJACION EN LISTA DE LAS ACLARACIONES AL INFORME TECNICO No. 045-2024 de 31 DE JULIO DE 2024, VISIBLE A Trámite SIREF 177

No. Y TIPO DE PROVIDENCIA	NOTIFICACIÓN / COMUNICACION
COMPLEMENTACIONES AL INFORME TÉCNICO	
AUTO No. 476 DEL 09 DE AGOSTO DE 2024 MEDIANTE EL CUAL SE PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACLARACIONES Y COMPLEMENTACIONES AL INFORME TÉCNICO	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 131-2024 DEL 12 DE AGOSTO DE 2024, VISIBLE A Trámite SIREF 188

RELACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

Comportan el sustento de la presente decisión las siguientes piezas probatorias obtenidas tanto en la Auditoría practicada por la Contraloría y en el transcurso de la Indagación Preliminar y del Proceso las siguientes:

1. Antecedente asignado en una (1) carpeta, 4 folios, que corresponde al formato de traslado del hallazgo e incluye 1 CD que contiene la siguiente información (inicia con el numeral 2), Archivo denominado SIREF: “2\_1\_anexo-antecedente\_cd\_folio5 2”, contiene el formato de traslado y sus soportes.

Antecedente

2\_1\_anexo-antecedente\_cd\_folio5 2.rar (copia de evaluación)

ArchivoÓrdenesHerramientasFavoritosOperacionesAyuda

AñadirExtraer enComprobarVerEliminarBuscarAsistenteInformación

Buscar virusComentarioProtegerAuto extraíble

2\_1\_anexo-antecedente\_cd\_folio5 2.rar\1\_ANEXO-ANTECEDENTE\_CD\_folio5\VF-45231 CALIDAD BOLARDOS BOULEVARD BUENAVENTURA - archivo RAR, tamaño descomprimido 129.269.002 bytes

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
Carpeta de archivos					
2. Contrato de obra Boulevard de Buenaventura.pdf	16.680.858	15.238.577	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:32 p. m.	8FF4A13D
3. ESTUDIOS PREVIOS.pdf	722.864	675.082	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	544CBA02
4. CDP.pdf	444.700	444.700	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	0A0F86D1
5. Adición al contrato de obra Boulevard.pdf	22.026.459	19.412.679	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	118A8D75
6. CANTIDADES DE OBRA.pdf	163.920	153.233	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	EE8E4B85
7. acta de inicio Cto obra boulevard 14-03-2014.pdf	1.174.058	1.061.161	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	0B454B9D
8. Acta de suspensión 1 Cto de Obra Boulevard 20-03-2014.pdf	1.342.768	1.234.391	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	6DEBE229
9. Acta de reinicio Cto de Obra Boulevard 21-04-2014.pdf	1.290.132	1.178.827	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	8CB6E403
10. Acta de suspensión 2 Cto de Obra Boulevard 25-04-2014.pdf	1.414.423	1.305.649	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:32 p. m.	CB8689A4
11. Acta de suspensión 2 ampliacion 1 Cto de Obra Boulevard 12-05-2014.pdf	1.304.829	1.194.589	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:32 p. m.	5F266F4C
12. Acta de reinicio Cto de Obra Boulevard 09-06-2014.pdf	1.261.609	1.151.137	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:32 p. m.	602640E0
13. Acta de suspensión 3 Cto de Obra Boulevard 28-07-2014.pdf	1.277.691	1.162.382	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:32 p. m.	514C3286
14. Acta de reinicio 3 Cto de Obra Boulevard 28-08-2014.pdf	1.631.481	1.523.070	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:32 p. m.	DCADC964
15. Acta de suspensión 04 Cto de Obra Boulevard 03-03-2015.pdf	1.453.177	1.342.726	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:32 p. m.	64D6B0A3
16. Acta de reinicio Cto de Obra Boulevard 23-06-2015.pdf	1.299.012	1.184.474	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:32 p. m.	F0867731
17. Acta de suspensión 5 Cto de Obra Boulevard 01-08-2015.pdf	1.351.863	1.242.177	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:32 p. m.	61AA201
18. Acta de reinicio Cto de Obra Boulevard 20-09-2015.pdf	1.354.266	1.230.802	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:32 p. m.	CBDC62B3
19. Acta de recibo de obra Boulevard 9 nov de 2015.pdf	1.501.564	1.390.596	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:32 p. m.	27C0C01E
20. Acta de recibo y pago final Obra Boulevard 19-11-2015.pdf	8.037.238	8.006.303	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:32 p. m.	0C8335B9
21. Acta de liquidación Cto de obra Boulevard 14-04-2016.pdf	3.069.925	2.826.443	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	D1784E4A
22. Acta de pago Final No. 6 sin firmas.pdf	482.814	281.858	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	F931AA37
23. comprobante de egreso, anticipo 20% cto de obra boulevard.pdf	866.698	743.256	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	C522911A
24. Egreso pago acta 1 Cto de Obra Boulevard.pdf	853.892	730.623	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	804DF8BC
25. Egreso pago acta 2 Cto de Obra Boulevard.pdf	845.109	722.372	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	C216B1D6
26. Egreso pago acta 3 Cto de Obra Boulevard.pdf	845.406	721.134	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	8C227B28
27. Egreso pago acta 4 Cto de Obra Boulevard.pdf	876.519	754.110	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	6D2C8231
28. Egreso pago acta 5 Cto de Obra Boulevard.pdf	856.623	734.529	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	4089D829
29. Contrato de interventoría al Boulevard.pdf	7.568.072	6.864.411	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	D8778339
30. CDP interventoría al Boulevard.pdf	328.850	246.801	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	D6045EB3
31. RP interventoría al Boulevard.pdf	763.911	571.232	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	CBA03A08
32. Acta de inicio interventoría al Boulevard.pdf	564.365	495.311	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	1F22EAFc
33. Informe Mensual 01 Interventoría Boulevard.pdf	1.260.972	820.556	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	A3F2D001
34. Informe Mensual 02 Interventoría Boulevard.pdf	1.567.528	1.144.160	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	4AD866A5
35. Informe Mensual 03 Interventoría Boulevard mod.pdf	2.457.124	1.602.456	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	8C28C186
36. Informe Mensual 04 Interventoría Boulevard.pdf	2.277.126	1.357.247	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	DC3C3D08
37. Informe Mensual 05 Interventoría Boulevard.pdf	2.821.290	2.187.486	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	85C8D955
38. Informe Mensual 06 Interventoría Boulevard.pdf	3.127.767	2.452.454	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	42921080
39. Informe Mensual 07 Interventoría Boulevard.pdf	4.085.232	3.230.307	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	F9EC6618
40. Informe Mensual 08 Interventoría Boulevard.pdf	4.874.012	3.855.782	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	B1982A87
41. Informe Mensual 09 Interventoría Boulevard.pdf	4.187.361	3.485.689	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	316C9CF2
42. Informe Mensual 10 Interventoría Boulevard.pdf	4.030.136	3.255.389	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	5F568022
43. Egreso anticipo Interventoría Boulevard.pdf	919.856	799.565	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	0996EBF0



44. Egreso acta parcial interventoría Boulevard.pdf	864.900	742.259	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	B5823CF7
45. Egreso pago acta 2 interventoría Boulevard.pdf	895.739	774.349	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	50553767
46. Egreso pago acta 3 interventoría Boulevard.pdf	867.741	745.153	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	D0E65E25
47. Egreso pago acta 4 interventoría boulevard.pdf	929.683	796.648	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	2553BFDD
48. RESOLUCION MINIMA CUANTIA 2013, 2014 y 2015.pdf	1.592.761	1.316.967	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	6F70661D
49. Copia de poliza Contrato Obra.pdf	1.192.287	1.128.922	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	9ABD1C2E
50. ACTA DE VISITA BOULEVARD.PDF	124.772	119.923	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	9AF7F390
51. INFORME TECNICO PROYECTO BOULEVARD.pdf	1.569.646	1.520.704	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	A2008DC0
52. OFICIO REMITE INFORMACION PRESUNTOS 1.PDF	32.929	31.086	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	261B2A52
53. BARTOLO VALENCIA HV, Nombramiento, Fxs, CC.PDF	315.874	304.085	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	82DEFE1F
54. JULIO CESAR DIAZ CUERO HV, Nombramiento, Fxs, CC.PDF	237.432	228.499	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	D650CC7F
55. Documentos CRP CONSTRUCTORA CESAR RUIZ.pdf	4.935.663	4.054.046	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	236D72B1
56. DOCUMENTOS UT BOULEVARD INTERVENTORIA.PDF	0	0	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	00000000
57. POLIZA DE MANEJO MUNICIPIO 2013.PDF	75.768	72.644	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	6B9828CE
58. POLIZA DE MANEJO MUNICIPIO 2014.PDF	142.974	137.128	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	D34C7F11
59. POLIZA DE MANEJO MUNICIPIO 2015.PDF	87.978	84.170	Documento Adobe Acrobat	12/06/2024 7:33 p. m.	AAD7171D
60. A-INVENTARIO ELECTRONICO.xls	58.880	22.552	Hoja de cálculo de Microsoft Exc...	12/06/2024 7:33 p. m.	B81C3043

Indagación Preliminar

En el desarrollo de la Indagación Preliminar se obtiene los siguientes soportes probatorios:

- Informe apoyo técnico del 02 de diciembre de 2018 y su video en DVD\_2018IE0094333, archivo denominado “20181202\_informe técnico-2018IE0094333\_FOLIOS139-143”, trámite SIREF 8.
- Resolución No. 105 del 25 de enero de 2013, Por medio del cual se fijan las cuantías máximas para la celebración de contratos en el Distrito de Buenaventura para la vigencia 2013:

CUANTIAS SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 2º, 2B Y 2.5 DE LA LEY 1151 DE 2007 Y EL DECRETO 734 DE 1976 (SEGÚN EL PRESUPUESTO ANUAL DE LA ENTIDAD)	MINIMA CUANTIA	MENOR CUANTIA	MAYOR CUANTIA
	Igual o Inferior a 65 SMLM (10% de la Menor Cuantía)	Superior a 65 SMLM hasta 650 SMLM	Desde 650 SMLM
PARA LAS ENTIDADES QUE TENGAN UN PRESUPUESTO ANUAL DE 400.000 SMLM Y 850 SMLM MENOR CUANTIA SERÁ HASTA 650 SMLM	Desde \$1 Hasta \$38.317.500	Desde \$38.317.500 Hasta \$383.175.000	\$383.175.000

- Resolución No. 110 del 11 de febrero de 2015, Por medio del cual se fijan las cuantías máximas para la celebración de contratos en el Distrito de Buenaventura para la vigencia 2015:

CUANTIAS SEÑALADAS EN LA LEY 1150 DE 2007 (SEGÚN EL PRESUPUESTO ANUAL DE LA ENTIDAD)	MINIMA CUANTIA	MENOR CUANTIA	MAYOR CUANTIA
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 SMLM e inferior a 850 SMLM, la Menor Cuantía será hasta 650 SMLM	Igual o Inferior a 65 SMLM (10% de la Menor Cuantía)	Superior a 65 SMLM hasta 850 SMLM	Desde 650 SMLM
	Hasta \$ 41.882.750	Desde \$ 41.882.750 hasta \$ 418.827.500	\$ 418.827.500

- 12\_20180802\_Respuesta-Auditor\_Anexos\_folio22, el cual contiene acta de visita, informe técnico del 3 de octubre de 2016, mesa de trabajo, respuesta a observaciones, comunicación de observaciones.
- 20\_20181116\_ACTA-VISITA ESPECIAL\_2017-000426\_Folios34-68, a la cual se anexan certificado laboral de los siguientes funcionarios: Bartolo Valencia Ramos, Ledis Torres Copete, Eliecer Arboleda Torres, Magaly Caicedo Castro, Edison Bioscar Ruiz Valencia, Julio Cesar Diaz Cuero, Juan Carlos González Cortés, Wisner Salomón Caicedo Alarcón.
- 21\_20181207\_RESPUESTA\_VISITA\_ESPECIAL\_2018ER0129161 ji P-2017-00426) folios69-137: Contiene certificaciones laborales de GERARDO OLMEDO TENORIO, WILBER VALENCIA JARAMILLO, LUZ MERCEDES CONTRERAS PANCHANO, EDINSON MOSQUERA SANCHEZ, LOURDES

CONCEPCIÓN CIFUENTES ARIAS, WILLIAM GUILLERMO DIQUE GIRALDO, HEBERTH LEON CAMPO ANGULO, MARIAMARLENE SUAREZ RIASCOS, WILBER VALENCIA JARAMILLO, REMBERTO QUIÑONEZ ALBAN, LUZ NELLY GARCÍA GONZALEZ, JOSE OMAR RIASCOS HURTADO, SEGUNDO BAYRON ANGULO ROSERO.

- 2220181202\_informe técnico-2018IE0094333\_FOLIOS139-143

**Proceso de Responsabilidad Fiscal**

- Oficio No. 2019ER0122563 del 05 de noviembre de 2019, archivo digital denominado “20191105\_RESPUESTA-ALCALDIA\_2019ER0122563” a folios 1-5, trámite SIREF 18.
- Oficio No. 2021IE0088855 del 10 de octubre de 2021, archivo denominado “20181202\_informe técnico” a folios 335-431, trámite SIREF 57.
- Oficio No. 2024IE0064863 del 02 de julio de 2024, archivo denominado “20240702\_Aclaración Informe Técnico\_PRF-2019-00072\_2024IE0064863” a folios 923-928, trámite SIREF 171.
- Oficio No. 2024IE0080441 del 25 de julio de 2024, archivo denominado “20240725\_Aclaraciones adicionales Informe Técnico\_PRF-2019-00072\_2024IE0080441” a folios 932-935, trámite SIREF 173.
- Oficio No. 2024IE0087496 del 09 de agosto de 2024, archivo denominado “20240809\_03 Aclaración Informe Técnico\_PRF-2019-00072\_2024IE0087496” a folios 971-975, trámite SIREF 186.

**VERSIONES LIBRES Y ESPONTÁNEAS**

1. **CONSTRUCTORA CRP, identificada con el Nit.: 890.313.269, representado legalmente por GUILLERMO GUERRERO GUZMAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.474.329 de Buenaventura, en su calidad de representante judicial, el 12 de abril del 2024, rinde versión libre y espontanea mediante escrito denominado 20240412\_VERSION LIBRE CONSTRUCTORA CRP\_PRF-2019-00072\_2024ER0075258, trámite a folios 742-751 - SIREF 122:**

“Teniendo en cuenta que la Contraloría General de la Republica - Grupo Responsabilidad Fiscal Gerencia Colegiada del Valle, había mediante auto ordeno diligencia de descargos, y que de igual manera en dicha actividad solicitamos presentar nuestra argumentación por escrito, me permito hacerle llegar en calidad de representante legal Judicial – Abogado, nuestro pronunciamiento al respecto.

Sea lo primero manifestar que al Doctor **HELDER DO CARMO DIAZ**. Profesional Universitario de la Contraloría General de la Republica de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, al correo [sec.comun.valle@contraloria.gov.co](mailto:sec.comun.valle@contraloria.gov.co), le había con anterioridad hecho llegar una defensa frente a las contradicciones, del informe técnico efectuada por el Ingeniero Civil FREDY ELEÁZAR LEMOS LUENGAS, en fecha del 20 al 24 de septiembre y del 27 de septiembre al 01 de octubre de 2021, nuevamente nos ratificamos en nuestros argumentos así:

**ANTECEDENTES RESUMIDOS DEL INFORME**

Revisada la trazabilidad del proceso de la referencia, encontramos que la Contraloría apertura proceso de responsabilidad Fiscal con identificación PRF-2019-00072, conforme a informe allegado al Cuerpo Colegiado de la Gerencia Departamental del



Valle por la auditoria al sistema General de regalías vigencia 2012-2015, en el contrato No. 133041 de 2013 celebrado entre el Municipio de Buenaventura y la firma Constructora CRPP SAS.

El proyecto contratado responde a la Rehabilitación y protección del espacio público boulevard de Buenaventura, e igual el presunto hallazgo corresponde al ITEM No. 4.9 Bolardo Tipo Portuario, con un deterioro hasta por un valor de presunto daño patrimonial de \$29.419.000.

En la valoración de los bolardos construidos bajo el contrato de obra 133041 del 16 de diciembre de 2013, se incluye prueba técnica de esclerometría, cuando el técnico considerara que la inspección visual deja dudas sobre el estado de deterioro (así lo manifiesta el Ingeniero Fredy E. Lemos, en su informe); igual busca ante todo estimar la resistencia del concreto en el bolardo construido.

Para poder individualizar los bolardos este efectuó sectorización por zonas (se establecieron diez (10) zonas), recalcando el número de bolardos que se verificaron, con un **TOTAL de 556 Bolardos**.

En su informe el analista técnico destaca que, dentro de la documentación del expediente, no se encontraban las especificaciones de los bolardos (hecho ajeno a contratista), de igual forma en las dependencias visitadas durante la comisión en Buenaventura (Secretaría de Infraestructura Vial y Secretaría de Planeación), no se encontraban dichas especificaciones (hecho ajeno a contratista), no obstante, se limita a verificar su estado y elementos estructurales, aplicando lo que él considera, son las especificaciones técnicas que se emplean en espacios públicos, para delimitar, controlar y definir las zonas peatonales, a fin de evitar el acceso de vehículos a estas áreas. Determina igual que son empleados en andenes, bahías de parqueo.

Entre las características que se tiene es que son de alta de resistencia del concreto (5.000 Psi= 35 MPa), esto debido a que están sometidos a **OCASIONALES COLISIONES POR PARTE DE LOS VEHÍCULOS**, adicionalmente, **SE DEBE GARANTIZAR SU DURABILIDAD DURANTE EL SERVICIO, MÁXIME EN BUENAVENTURA, EN DONDE SE TIENE UN AMBIENTE AGRESIVO**.

**NUESTROS ARGUMENTOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN:**

La contraloría inicia este proceso de Responsabilidad Fiscal, por encontrar en la ejecución del contrato, bolardos faltantes y deteriorados.

Hemos venido argumentando las causas y justificación de los deterioros de los bolardos entre otras en lo siguiente:

Una vez recibida la obra el ente territorial contratante debería:

**Recibir mediante acta la obra a satisfacción**

- Este contrato y las obras ejecutadas cumplieron con las especificaciones contractuales establecidas por el contratante.
- Se recibió la obra a satisfacción.
- El acta de liquidación del contrato no se reparó en la ejecución.

**La responsabilidad precontractual, contractual y post contractual, es responsabilidad del Distrito de Buenaventura**

- Que en la secretaria de Obras no haya registro de las especificaciones, no es de nuestro resorte, nosotros nos limitamos a ejecutar obras conforme a las descripciones entregadas según diseños.
- Las obras ejecutadas son parte del espacio público, por tanto, el ente territorial estaba en la obligación constitucional de conservar, determinar su uso, facultad para autorizar el uso, ya sea de forma permanente o transitorio, determinar responsabilidades en lo que atañe al cuidado de este espacio bien de uso público cuando fuere cedido en préstamo para actividades culturales y comerciales ya sea de carácter públicas o privadas, Hacer mantenimiento de las obras.

La realidad es que el faltante y deterioro de los bolardos, además de las causadas por el tiempo y el clima, lo son igualmente:

- Mal diseño, pues estos quedaban expuestos a golpes por la cercanía a la vía pública.
- Proliferación y mal manejo de vendedores ambulantes estacionarios.
- Mal manejo del tránsito de automotores, pues son parqueaderos y las motos deambulan por la plazoleta.
- Préstamo de la plazoleta sin los cuidados exigidos por la norma.
- Mala vigilancia, lo que origina constantes actividades que deterioran los mencionados bolardos, prueba de ello son los registros fotográficos que anexamos, demostrando con ello como hasta equipo de combate terrestre del ejercito ingresa a la plazoleta (la pregunta es **“por donde ingresan, si los bolardos cierran el perímetro del corredor y de la plazoleta”**).  
**(anexo registro fotográfico de bolaro levantado de cuajo para lograr ingresar vehículos para montar o desmontar tarimas, para venta, para actividades militares, culturales; independientemente de las motos que sin ningún control cruzan la plazoleta para evitar un mayor desplazamiento).**

Llama la atención que, en el informe técnico, no se mencionen hallazgos de:

- Parqueo y lavado de motocicletas
- Parqueo y tránsito de vehículos artesanales de vendedores ambulantes
- Soporte de apoyo para carretas y vehículos artesanales de vendedores ambulantes.
- Tránsito de vehículos (carros y motocicletas)
- Instalaciones constantes de tarimas metálicas para actividades culturales, militares y hasta políticas
- Ingreso de vehículos a la zona para exposición militar, venta de vehículos, entrega de vehículos por las autoridades.
- Un análisis de la Exposición climática

No refutar esto, aceptar por parte del investigado como verdaderas las afirmaciones y causales de los presuntos daños patrimoniales recibidas por parte del técnico de la contraloría, sin que dicho informe incluya un componente objetivo y uno subjetivo que le de solidez a sus afirmaciones, ¿y no ser meramente argumentativa y especulativa?

**Dice el informe:**

**“Presenta desprendimiento del concreto. Ante la evidencia del deterioro no se efectuó prueba de esclerometría”, el informe no determina otras causas que lo generan, por el contrario, presume son responsabilidad del contratista debido a “causado por deficiencias constructivas” IGNORANDO LOS ARGUMENTOS NUESTROS LA CONTRALORÍA ANTES MENCIONADOS EN NUESTRO ESCRITO DE DESCARGOS PRESENTADO INICIALMENTE. (diciembre 13 de 2019).**

Al final hace las conclusiones de la visita así:

**Conforme a la inspección física efectuada, el total de bolardos evidenciados fue 556, cuando el número de bolardos facturados y cobrados fue 580. (Lo anterior indica que hubo 24 bolardos que fueron pagados y no fueron construidos.)**

**Se responde:**  
En este caso, no se determina las causas de bolardos instalados, facturados y cobrados, que no se encuentran en el sitio, pero igual en el primer informe no se hace mención de ello, por una razón simple, y es que su diseño se expuso a la suerte y vida misma de los bolardos en el tiempo, los que están sometidos a mal trato de vendedores, vehículos automotores etc.

**Dice la Contraloría en el informe técnico “De los 556 bolardos inspeccionados, 218 tienen señales de deterioro, que probablemente no fue causado por choques de vehículos.**

Comprensible su apreciación, pero se olvida que muchos fueron retirados por terceros, producto del mal manejo del espacio público.

Es obligatorio determinar el impactos y sus variables climatológicas en la temperatura de los materiales de construcción, es esta zona de país, producto del grado de inercia térmica de los materiales y de la ubicación de los mismos, con respecto a la exposición a que están sometidos, son una de las causa que deterioran los bolardo, y que en este caso es una plazoleta a sol candente, con cambios bruscos de temperaturas (entre 30 grados a 34 grados) e igual por ser una zona altamente lluviosa ( La precipitación anual es de 10.804 mm.)

EL INFORME ESTA IGNORANDO LOS ARGUMENTOS NUESTROS MENCIONADOS EN ESCRITO, con esto, dejando un manto de duda, con respecto a que es causa del contratista, sin ningún soporte, en posible causa no probada. Esta hipótesis consideramos viola el principio de suficiencia, que se emplea para el análisis de la veracidad de una afirmación. De acuerdo con su definición, al no existir pruebas en contra de un postulado no supone una prueba suficiente para confirmar su veracidad.

**Dice la contraloría: “El valor de estos 218 bolardos asciende a \$87.854.000. • Teniendo en cuenta los dos puntos anteriores el valor del presunto detrimento patrimonial sería igual a \$97.526.000 (Noventa y siete millones quinientos veintiséis mil pesos), que corresponden a los bolardos no encontrados más los bolardos deteriorados por deficiencias constructivas.”**

REGISTRO FOTOGRAFICO













*(Obsérvese como del impacto se giró el bolardo con desprendimiento no producto de su construcción)*



*Observar como el bolardo fue arrancado del concreto, así haya una construcción del mismo con el debido hierro para su resistencia a golpes.*







***(Zona de parqueo al final de la catedral.)***







***Carro de vendedor ambulante no estacionario utilizando como soporte el bolardo***



***Vendedores estacionarios, dentro del perímetro, la pregunta es, como tienen acceso a esta zona, quien vigila que no lo hagan,***





*Vehículos parqueados en la acera sin control alguno.*







Ahora, es necesario solicitar a la Contraloría, que para garantizar el debido proceso, se aplique : El derecho a controvertir la prueba, es la facultad que tiene la parte o el interviniente de discutir elementos de ella que respaldan la hipótesis adversa, junto con la posibilidad de presentar material probatorio que refute la probanza contraria a la hipótesis que se defiende dentro de un proceso.

El espacio público se encuentra definido en la Ley 9 de 1989, entendido como el género, en tanto la especie se denomina bienes de uso público.

La Constitución Política Nacional, en su artículo 82, señala que “es un deber del Estado velar por la protección de la integralidad del espacio público y por su destinación al uso común prevaleciendo este sobre el interés particular”.

Entre otras podemos mencionar las siguientes normas:

- **Ley 388 de 1997 Espacio público en instrumentos de planeación (planes parciales, actuaciones urbanísticas).**
- **Decreto 1504 de 1998 (Art. 18-19) Inclusión del Espacio Público en los Planes de Ordenamiento Territorial**
- **Decreto 1538 de 2005 Accesibilidad en el Espacio Público**
- **Decreto 1077 de 2015**
- **Ley 2037 de 2020 Políticas tendientes a la generación, recuperación, aprovechamiento y sostenibilidad del EP.**
- **Planes de Desarrollo Ley 9 de 1989 (Art.5-8)**

En una ciudad, los espacios públicos pueden ser activos o pasivos según como se asuma la administración de estos recursos.

Como nuestros argumentos ya fueron expuestos, solicitamos, que la Contraloría, exija a Planeación Distrital de Buenaventura y a toda la administración:

1. Se haga entrega de los permisos otorgados de este espacio público a personas naturales o jurídicas, sector público o privado, dentro de este periodo de deterior de los bolardos.
  2. Que dichos actos administrativos (**Licencia de intervención y ocupación del espacio público**) sean material probatorio que se arrime al plenario o expediente.
  3. Que se determine si con la omisión en expedir los debidos permisos, **Licencia de intervención y ocupación del espacio público**) se generaron daños que no solo violentaron la norma, si no que generaron daños patrimoniales al estado.”
- 
2. **JULIO CESAR DIAZ CUERO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.489.601, no rindió versión libre; ante su fallecimiento se designó Curador Ad litem al abogado Gerardo Adrián Castaño Cárdenas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16285685, Tarjeta Profesional de Abogado No. 344996 del Consejo Superior de la Judicatura, 20240411\_ACTA DE POSESION CURADOR\_PRF-2019-00072\_6862808 y los herederos cuentan con apoderado de confianza, abogado Jaime Domingo de Ávila Hernández.**
  3. **UNIÓN TEMPORAL BOULEVARD DE BUENAVENTURA, identificada con el Nit. No. 900.748.452-1, representada legalmente por HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula No. 16.715.628, se citó mediante oficio No. 2024EE0054983 del 21 de marzo de 2024 a versión libre y espontanea, para el 08 de abril de 2024 a las 2:00 p.m. y se**

reprogramaron a petición del apoderado de confianza del presunto para el 30 de abril a las 10:00 a.m.

Se solicitó mediante correo institucional la designación de defensor de oficio, para que represente la **UNIÓN TEMPORAL BOULEVARD DE BUENAVENTURA**:

- Con sigedoc No. 2024EE0052701 del 20 de marzo de 2024, a la Facultad de Derecho de la Universidad ICESI- Dirección de Consultorio Jurídico;
- Con sigedoc No. 2024EE0052702 del 20 de marzo de 2024, a la Facultad de Derecho de la Universidad San Buenaventura - Dirección de Consultorio Jurídico;
- Con sigedoc No. 2024EE0052703 del 20 de marzo de 2024, a la Facultad de Derecho de la Universidad Libre Seccional Cali - Dirección de Consultorio Jurídico;
- Con sigedoc No. 2024EE0052700 del 20 de marzo de 2024, a la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa - Dirección de Consultorio Jurídico y
- Con sigedoc No. 2024EE0052700 del 20 de marzo de 2024, a la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali,

Mediante oficio No. 2024ER0074030 del 11 de abril de 2024, la Universidad ICESI, asigna al estudiante MIGUEL ANGEL CARABALI MARQUEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 1107529855, código No. A00356074. En Auto No. 278 del 20 de mayo de 2024, se le designa como apoderada de oficio. Toma posesión como Apoderado de Oficio mediante Acta de Posesión del 22 de mayo de 2024, y se entrega copia del expediente el 24 de junio de 2024.

El día 27 de junio de 2024, mediante correo electrónico se allega versión libre 2024ER0139038, suscrita por el representante de la **UNIÓN TEMPORAL BOULEVARD DE BUENAVENTURA**:

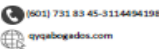


Doctor  
LIGIA STELLA CHAVES ORTIZ  
GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
E. S. D.

REFERENCIA: PRF 2019-00072  
INVESTIGADA: UNIÓN TEMPORAL BOULEVAR DE BUENAVENTURA  
ENTIDAD AFECTADA: DISTRITO DE BUENAVENTURA  
ASUNTO: VERSIÓN LIBRE

El suscrito HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ, mayor de edad e identificada con la cédula de ciudadanía número 900.748.452, en calidad de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL BOULEVAR DE BUENAVENTURA** procedo a rendir versión libre respecto al Auto de Apertura del proceso de responsabilidad fiscal No. 2019-00072 del 30 de septiembre de 2019, proferido por la Contraloría General de la República.

Manifiesto que, para rendir la presente versión libre, me encuentro asesorada legalmente por el profesional del derecho JULIÁN DAVID SUÁREZ GIL de acuerdo con el poder previamente otorgado y radicado ante esta entidad, quien es el encargado de mi defensa técnica, para lo cual de manera conjunta hemos preparado esta versión libre.





[..\C PRINCIPAL\20240627 VERSIÓN LIBRE PRF 2019-00072 \(VR. 27.06.2024\) \(1\) \(1\) UT BOULEVARD DE BUENAVENTURA.pdf](#)

a. DICONSULTORIA S.A., identificada con el Nit.: 800003776-2, miembro de la UNIÓN TEMPORAL BOULEVAR BUENAVENTURA, identificada con el Nit.: 900.748.452-1, representada legalmente por HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.715.628, fue citado por medio de oficio No. 2024EE0103912 del 04 de junio de 2024 a versión libre y espontanea para el día 18 de junio de 2024, a la cual no compareció.

En Auto No. 278 del 20 de mayo de 2024, se le designa como apoderada de oficio a la estudiante de la Universidad ICESI DANIELA FERNANDA CRUZ URBANO identificada con C.C No.1002957117, código No. A00355528.

Presento escrito el 06 de agosto de 2024, 20240806\_VERSION LIBRE PRF 2019-00072\_DICONSULTORIA SA\_PRF-2019-00072\_2024ER0172587.

[..\C PRINCIPAL\20240806 VERSION LIBRE PRF 2019-00072 DICONSULTORIA SA PRF-2019-00072\\_2024ER0172587.pdf](#)



Doctora  
MARYORY PAREDES RUIZ  
GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
E. S. D.

REFERENCIA: PRF 2019-00072  
INVESTIGADA: DICONSULTORIA S.A.  
ENTIDAD AFECTADA: DISTRITO DE BUENAVENTURA  
ASUNTO: VERSIÓN LIBRE

El suscrito HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ, mayor de edad e identificada con la cédula de ciudadanía número 900.748.452, en calidad de representante legal de DICONSULTORIA S.A., procedo a rendir versión libre respecto al Auto de Apertura del proceso de responsabilidad fiscal No. 2019-00072 del 30 de septiembre de 2019, proferido por la Contraloría General de la República.

Manifiesto que, para rendir la presente versión libre, me encuentro asesorada legalmente por el profesional del derecho JULIÁN DAVID SUÁREZ GIL de acuerdo con el poder previamente otorgado y radicado ante esta entidad, quien es el encargado de mi defensa técnica, para lo cual de manera conjunta hemos preparado esta versión libre.



b. **CARLOS ALFREDO VALENCIA PARDO S.A.S**, identificado con el Nit. 901.420.994-6, miembro de la **UNIÓN TEMPORAL BOULEVAR BUENAVENTURA**, representada legalmente por el señor **CARLOS ALFREDO VALENCIA PARDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.691.511, fue citado por medio de oficio No. 2024EE0054990 del 21 de marzo de 2024 a versión libre y espontanea para el día 09 de abril de 2024, a la cual no compareció.

En Auto No. 278 del 20 de mayo de 2024, se le designa como apoderada de oficio a la estudiante de la Universidad ICESI **LAURA DANIELA CASTELLANOS NIÑO** identificada con C.C No.1000285838, código No. A00371773.

4. **BARTOLO VALENCIA RAMOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.469.636 de Buenaventura, en su calidad de Alcalde Municipal para la ocurrencia de los hechos:

- Citado por oficio No. 2024EE0056675 del 01 de abril de 2024 a versión libre y espontanea a la cual no compareció.

Mediante Auto No. 278 del 20 de mayo de 2024, se designa como apoderado de oficio a **CARLOS ARTURO MUÑOZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1005965130, estudiante de la Universidad Santiago de Cali.

**CONSIDERACIONES**

**OBJETO Y FINALIDAD DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL**

A través del Proceso de Responsabilidad Fiscal se obtiene una declaración jurídica, en la cual se predica con certeza que un determinado servidor público o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan de sus actuaciones irregulares, en ejercicio o con ocasión de la gestión fiscal que ha realizado, y que está obligado a reparar económicamente el daño causado al erario por su conducta dolosa o gravemente culposa (artículo 1 Ley 610 de 2000).

La responsabilidad que se declara es esencialmente administrativa, porque juzga la conducta de un servidor público o de un particular o persona que ejerce funciones públicas, por el incumplimiento de los deberes que le incumben, o por estar incurso en conductas prohibidas o irregulares que afectan los bienes o recursos públicos y lesionan, por consiguiente, el patrimonio estatal.

Es patrimonial, porque como consecuencia de su declaración el imputado debe resarcir el daño causado por la gestión fiscal irregular, mediante el pago de una indemnización pecuniaria, que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.

Esta responsabilidad puede comprender desde la órbita de la Gestión Fiscal a los directivos de las entidades y demás personas que manejen o administren recursos o fondos públicos, así como a quienes desempeñen funciones de ordenación, control, dirección y coordinación; también a los contratistas y

particulares que vinculados al proceso hubieren causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado, desde la Gestión Fiscal, con ocasión de esta o que contribuyan al detrimento público.

La Responsabilidad Fiscal tiene carácter resarcitorio ya que su único fin consiste en reparar el patrimonio público que ha sido menguado por servidores públicos o particulares que realizaron una gestión fiscal irregular. Esto la distingue de las responsabilidades penal y disciplinaria. La Responsabilidad Fiscal no pretende castigar a quienes han causado un daño patrimonial al Estado, sino que busca simplemente resarcir o reparar dicho daño.

Para corroborar este carácter indemnizatorio de la responsabilidad fiscal sólo hace falta consultar el artículo 4 de la Ley 610 de 2000, que a la letra dice: **“Objeto de la responsabilidad fiscal.** La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.”

En este mismo orden de ideas es una responsabilidad independiente de la disciplinaria y la penal. Por ello, una misma conducta puede dar origen a los tres tipos de responsabilidad - fiscal, penal y disciplinaria. La penal y la disciplinaria tienen un propósito concreto: castigar determinadas conductas que se consideran socialmente reprochables. La Responsabilidad Fiscal por el contrario sólo busca que el patrimonio público permanezca indemne. El propósito es indemnizatorio: quienes han causado un detrimento patrimonial al erario deben repararlo.

De acuerdo con lo anterior, la Responsabilidad Fiscal se estructura sobre tres elementos: a) un Daño Patrimonial al Estado; b) una Conducta Dolosa o Gravemente Culposa atribuible a una persona que realiza Gestión Fiscal y; c) un nexo causal entre el Daño y la Conducta. Sólo en el evento de que se reúnan estos tres elementos puede endilgarse responsabilidad fiscal a una persona. Dada la importancia del punto es necesario desarrollar el concepto de *“Daño Patrimonial al Estado”*.

Desde los principios generales de responsabilidad es necesario destacar que el daño debe ser cierto. Se entiende que el daño es cierto cuando a los ojos del juez aparece con evidencia que la acción lesiva del agente ha producido o producirá una disminución patrimonial o moral en el demandante.

La precitada Ley 610 del 15 de agosto de 2000 en su artículo 6 consagra: **“Daño Patrimonial al Estado.** Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan

*directamente o contribuyan al detrimento del patrimonio público.” (Subrayado declarado inexecutable Sentencia C-340-2007)*

Lo primero que se destaca es que el daño patrimonial al Estado es producido en ejercicio de la gestión fiscal. Esto es coherente con el artículo 5 de la misma ley que dispone como uno de los elementos de la Responsabilidad Fiscal *“una conducta dolosa o gravemente culpable atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.”* Es lógico que si la responsabilidad fiscal sólo puede ser atribuida a alguien que realiza gestión fiscal necesariamente esa responsabilidad lo será por un daño causado en ejercicio de dicha gestión. Deben reunirse, entonces, los dos elementos: a) una persona que realiza gestión fiscal o actúa con ocasión de esta; y b) el daño debió haber sido producido en ejercicio de esa gestión fiscal o con ocasión de esta. Contrario sensu si el daño lo efectúa una persona que no realiza gestión fiscal o no se produce en ejercicio de la gestión fiscal, no existirá responsabilidad fiscal.

Este punto es central en el estudio de la Responsabilidad Fiscal puesto que ella se estructura sobre el concepto de Gestión Fiscal. La Contraloría General de la República la vigila y la Responsabilidad Fiscal precisamente se deriva de ella. Esta es el pilar, contemplado en el artículo 3 de la ley 610 de 2000, sobre el cual se debe estructurar cualquier teoría seria al respecto. Es el elemento propio que la diferencia de otras responsabilidades y le da autonomía conceptual.

En segundo lugar, la Ley nos dice que la gestión fiscal que produce el daño es aquella antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna. Lo cual básicamente quiere decir que el daño patrimonial al Estado ocurre cuando los gestores fiscales actúan de forma contraria a los principios que rigen la función administrativa en general y la gestión fiscal en particular.

En síntesis, el Daño Patrimonial al Estado es producido en desarrollo de la Gestión Fiscal. La Ley contempla una serie de calificativos para la gestión fiscal que produce el daño: en general se trata de una gestión fiscal que contraría los principios establecidos para la función administrativa y los fines o cometidos Estatales.

**EL CASO CONCRETO**

<b>Contrato de Obra No.</b>	133041 del 16 de diciembre de 2013
<b>CDP</b>	No. 20133848 del 26 de agosto de 2013, por nueve mil setecientos ochenta y tres millones trescientos noventa y dos mil trescientos noventa y ocho pesos \$9.783.392.398
<b>Contrato de interventoría No.</b>	141226 del 11 de Julio de 2014
<b>Contratante</b>	Distrito Especial de Buenaventura, Valle del Cauca, identificado con el Nit. No. 890.399.045-3, a través de su representante legal, Bartolo Valencia Ramos, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.469.636, en su calidad de Alcalde



Contratista	CONSTRUCTORA CRP identificada con el Nit.: 890.313.269-7 representada legalmente por Cesar Ruiz Perea identificado con cédula de ciudadanía No. 16.693.622.
Objeto	<i>“Rehabilitación y protección del espacio público Boulevard Buenaventura”</i>
Programación de Pagos	<p>1. Un anticipo del veinte (20%) del valor básico del contrato. Para el manejo del anticipo, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato. Además, el contratista entregará al contratante y o interventor el Programa detallado de ejecución de obras a adelantar.</p> <p>2. Los pagos subsiguientes se efectuarán con la presentación de actas parciales, previa aprobación del interventor, acta que se emitirá conjuntamente entre el Contratista y la interventoría que contendrá la cantidad de obra realizada. Cada acta deberá contener el número del Ítem, su descripción, su precio unitario, la cantidad de obra ejecutada desde la medida anterior y el monto de la misma.</p> <p>3. Los pagos quedan subordinados a la aprobación y disponibilidad presupuestal, ajustándose al programa anual mensualizado de caja (P.A.C.).3.</p> <p>Los dineros entregados por concepto de anticipo se amortizarán con las actas parciales hasta su culminación</p>
Valor del Contrato	<p>Nueve mil setecientos sesenta y dos millones setecientos sesenta y ocho mil ciento noventa y tres pesos \$9.762.768.193:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comprobante de Egreso No. 86297 del 06 de marzo de 2014, por \$ 1.688.958.898, anticipo del 20%.</li><li>• Comprobante de Egreso No. 92808 del 23 de enero de 2015, por \$ 715.903.473, Acta No.1.</li><li>• Comprobante de Egreso No. 94968 del 03 de marzo de 2015, por \$ 1.762.910.469,87, Acta No. 2.</li><li>• Comprobante de Egreso No. 95928 del 20 de abril de 2015, por \$1.851.378.289,51, Acta No. 3.</li><li>• Comprobante de Egreso No. 96886 del 09 de junio de 2015, por \$ 1.689.191.580,40, Acta No. 4.</li><li>• Comprobante de Egreso No. 97155 del 02 de julio de 2015, por \$ 688.236.238,00, Acta No. 5.</li></ul> <p>Acta de pago y recibo final del 19 de noviembre de 2016 por valor de \$ 1.332.683.266.</p>
Fecha de inicio	20 de marzo de 2014
Fecha de terminación	21 de noviembre de 2014
Plazo de Ejecución	8 meses

<b>Supervisión</b>	<p>Se estableció en el Contrato de Interventoría No. 141226 del 11 de julio de 2014: <b>“Clausula 8- Supervisión:</b> La SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL, verificara la ejecución y cumplimiento de las actividades del interventor, y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas a desarrollo del Contrato. En términos generales el profesional designado por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL, realizara la gerencia del proyecto y será quien verifique el cabal desarrollo y ejecución del contrato, quien dará el visto bueno a las cuentas de cobro y a los informes de interventoría”.</p> <p>Mediante Decreto 001 de 2012 la Alcaldía Distrital de Buenaventura, designó al profesional JULIO CESAR DIAZ CRUZ, como SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL.</p>
<b>Adición al Contrato</b>	<p>Con fecha del 24 de junio de 2015 se realiza Adición No. 1 al Contrato de Obra No. 133041 del 2013, por un valor de mil millones seiscientos sesenta y tres millones ciento veintiocho mil seiscientos veinticinco pesos con ochenta y cinco centavos (\$1.663.128.625.85).</p>

<b>Contrato de Interventoría No.</b>	141226 del 11 de julio de 2014.
<b>Contratante</b>	Distrito Especial de Buenaventura, Valle del Cauca, identificado con el Nit.: 890.399.045-3, a través de su representante legal, Víctor Hugo Vidal Piedrahita, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.498.156, en su calidad de Alcalde.
<b>Contratista</b>	UNION TEMPORAL BOULEVAR DE BUENAVENTURA, identificada con Nit. 900.748.452-1, representada legalmente por HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 16.715.628.
<b>Objeto</b>	“Interventoría técnica para la rehabilitación y protección del espacio público Boulevard Buenaventura en la zona urbana del distrito de Buenaventura departamento del Valle del cauca”
<b>Valor del Contrato</b>	Seiscientos ochenta y un millones trescientos ochenta y cuatro mil ciento cincuenta y seis pesos (\$ 681.384.000)
<b>Fecha de inicio</b>	11 de agosto de 2014
<b>Fecha de terminación</b>	8 de mayo de 2015
<b>Plazo de Ejecución</b>	270 días
<b>Supervisión</b>	<p>Se estableció en el Contrato de Interventoría No. 141226 del 11 de julio de 2014: <b>“Clausula 8- Supervisión:</b> La SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL, verificara la ejecución y cumplimiento de las actividades del interventor, y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas a desarrollo del Contrato. En términos generales el profesional designado por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL,</p>

	<p>realizara la gerencia del proyecto y será quien verifique el cabal desarrollo y ejecución del contrato, quien dará el visto bueno a las cuentas de cobro y a los informes de interventoría”.</p> <p>Mediante Decreto 001 de 2012 la Alcaldía Distrital de Buenaventura, designó al profesional JULIO CESAR DIAZ CRUZ, como SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL.</p>
--	---

En el Contrato de Obra No. 133041 de 2013, objeto: REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO: BOULEVARD BUENAVENTURA, el Profesional de Apoyo en Desarrollo de la Indagación Preliminar detectó en el Análisis de los bolardos realizado al Contrato:

“El ensayo se efectuó en un bolardo que no presentaba deterioro aparente, tanto en la cara superior, como en la cara lateral, y en dos bolardos que presentaban deterioro, en las mismas caras, destacando que este deterioro no es causado por choques de vehículos.

A continuación, se consignan las lecturas y los cálculos resultantes del ensayo del bolardo ubicado al frente de Pacific Center, el cual no presenta señal de deterioro.

<b>ESCLEROMETRO</b>		Posición Aparato: Vertical hacia abajo		
Marca: SJJW Serie: 01020025		Elemento ensayado: Bolardo		
Rango medida: 10-80 MPa Energía Impacto: 2.207±0.1 J		Ubicación: Cara superior, al frente de Pacific Center		
LECTURAS				
48	46	42	46	46
48	48	48	40	46
CALCULOS				
PROMEDIO: 45.8				
LECTURAS A TENER EN CUENTA				
48	46	42	46	46
48	48	48	40	46

PROMEDIO CORREGIDO:45.8
RESISTENCIA (MPa):60

<b>ESCLEROMETRO</b>		Posición Aparato: Horizontal		
Marca: SJJW Serie: 01020025		Elemento ensayado: Bolardo		
Rango medida: 10-80 MPa Energía Impacto: 2.207±0.1 J		Ubicación: Cara lateral, al frente de Pacific Center		
LECTURAS				
48	48	46	48	48
48	50	46	48	48
CALCULOS				
PROMEDIO: 47.8				
LECTURAS A TENER EN CUENTA				
48	48	46	48	48
48	50	46	48	48
PROMEDIO CORREGIDO: 47.8				
RESISTENCIA (MPa): > 60				



A continuación, se consignan las lecturas y los cálculos resultantes del ensayo del bolardo ubicado diagonal a la panadería La Calidad, el cual presenta señal de deterioro.

<b>ESCLEROMETRO</b>		<b>Posición Aparato:</b> Vertical hacia abajo		
Marca: SJJW Serie: 01020025		<b>Elemento ensayado:</b> Bolardo		
Rango medida: 10-80 MPa Energía Impacto: 2.207±0.1 J		<b>Ubicación:</b> Cara superior, diagonal panadería la <b>Calidad</b>		
<b>LECTURAS</b>				
28	26	26	26	26
28	26	24	22	24
<b>CALCULOS</b>				
PROMEDIO: 25.6				
<b>LECTURAS A TENER EN CUENTA</b>				
28	26	26	26	26
28	26	24	22	24
PROMEDIO CORREGIDO:25.6				
RESISTENCIA (MPa):22.3				

<b>ESCLEROMETRO</b>		<b>Posición Aparato:</b> Horizontal		
Marca: SJJW Serie: 01020025		<b>Elemento ensayado:</b> Bolardo		
Rango medida: 10-60 MPa Energía Impacto: 2.207±0.1 J		<b>Ubicación:</b> Cara lateral, diagonal panadería la Calidad		
<b>LECTURAS</b>				
28	28	28	26	24
24	26	27	28	26
<b>CALCULOS</b>				
PROMEDIO: 26.5				
<b>LECTURAS A TENER EN CUENTA</b>				
28	28	28	26	24
24	26	27	28	26
PROMEDIO CORREGIDO: 26.5				
RESISTENCIA (MPa): > 18.2				



A continuación, se consignan las lecturas y los cálculos resultantes del ensayo del bolardo ubicado al frente de la catedral al final del recorrido, el cual presenta señal de deterioro.

<b>ESCLEROMETRO</b>		<b>Posición Aparato:</b> Vertical hacia abajo		
Marca: SJJW Serie: 01020025		<b>Elemento ensayado:</b> Bolardo		
Rango medida: 10-80 MPa Energía Impacto: 2.207±0.1 J		<b>Ubicación:</b> Cara superior, frente de la catedral		
<b>LECTURAS</b>				
26	26	22	28	26
30	28	26	26	26
<b>CALCULOS</b>				
PROMEDIO: 25.6				
<b>LECTURAS A TENER EN CUENTA</b>				
26	26	22	28	26
30	28	26	26	26
PROMEDIO CORREGIDO:26.4				
RESISTENCIA (MPa):23.5				

<b>ESCLEROMETRO</b>		<b>Posición Aparato:</b> Horizontal		
Marca: SJJW Serie: 01020025		<b>Elemento ensayado:</b> Bolardo		
Rango medida: 10-80 MPa Energía Impacto: 2.207±0.1 J		<b>Ubicación:</b> Cara lateral, frente de la catedral		
<b>LECTURAS</b>				
30	36	36	36	34
30	30	34	36	36
<b>CALCULOS</b>				
PROMEDIO: 33.8				
<b>LECTURAS A TENER EN CUENTA</b>				
30	36	36	36	34
30	30	34	36	36
PROMEDIO CORREGIDO: 33.8				
RESISTENCIA (MPa): > 29.6				





Como puede observar los ensayos realizados en el bolardo que no presenta señales de deterioro, tienen como resultados una mayor resistencia en comparación con los bolardos que presentan deterioro. Esto puede ser debido a que la resistencia de los bolardos con señales de deterioro va disminuyendo con el tiempo a causa de la inclemencia del clima en el puerto de Buenaventura, lo cual implica a que al concreto utilizado, en estos bolardos, le hizo falta un aditivo que mitiga los efectos del clima o en su defecto pintura en la parte exterior que también mitiga estos efectos, tal como se observó en algunos bolardos pintados por vecinos del sector.

Cabe destacar que dentro de la documentación del expediente no se encontraban las especificaciones de los bolardos, de igual forma en las dependencias visitadas durante la comisión en Buenaventura (Secretaría de Infraestructura Vial y Secretaría de Planeación), no se encontraban dichas especificaciones, sin embargo, este tipo de elementos, generalmente deben presentar una resistencia de al menos 5000 PSI, que equivalen a 35. MPa, como se puede observar, conforme al ensayo efectuado, el bolardo que no presenta señales de deterioro, tiene una resistencia por encima de los 35 MPa, y los dos bolardos que presentan señales de deterioro no llegan a los 35 MPa. Hay que considerar que el ensayo realizado tiene un margen de error del 20%, conforme a las especificaciones del esclerómetro.

Teniendo en cuenta que no todos los bolardos presentan deterioro, se efectuó un inventario de los bolardos que presentan señales de deterioro y que el mismo no es causado por choques de vehículos, identificados porque presentan fisuras en las caras del bolardo y el mismo no está desplomado, que es lo primero que sucede cuando se choca un vehículo contra este tipo de estructuras.

El inventario de los bolardos con señales de deterioro asciende a 73 bolardos, teniendo en cuenta que el precio unitario de cada bolardo, incluido el AIU es de \$403.000, se tendría un presunto detrimento de \$29.419.000.

Anexo DVD que contiene un video realizado en la visita efectuando el recorrido por la zona de bolardos.”

Teniendo en cuenta lo anterior se tiene como valor del detrimento patrimonial la suma de *VEINTINUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE* (\$29.419.000), correspondiente al deterioro evidenciado en los 73 bolardos, identificados por el profesional de apoyo.

En el trámite del proceso de responsabilidad fiscal, mediante Auto No. 360 del 24 de agosto de 2020, se decreta la práctica de informe técnico y mediante oficio 2021IE0088855 de fecha 19 de octubre de 2021, se designó el profesional para la práctica de la prueba al Ingeniero Civil FREDY ELEAZAR LEMOS LUENGAS, quien al rendir el informe técnico precisa:

*“El presente informe, responde al resultado de un apoyo técnico realizado al Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF-2019-00072, de acuerdo a lo decretado en el Auto de Pruebas No 360 del 24 de agosto de 2020, proferido la Directiva ponente de la Gerencia Colegiada Departamental de Valle del Cauca, en donde se me designa para efectuar PRUEBA TÉCNICA en el lugar de ejecución de la obra que trata el Contrato de Obra No. 133041 del 16 de diciembre de 2013, para establecerlas causas de las deficiencias constructivas observadas para el ítem No 4.9 BOLARDO TIPO PORTUARIO y poder cuantificar el presunto daño patrimonial.*

*Este PRF se inició a raíz de la Auditoría practicada al Sistema General de Regalías para las vigencias 2012-2015 en donde se evaluó el contrato de obra 133041 del 16 de diciembre de 2013 y se estableció un hallazgo relacionado con las deficiencias constructivas en los bolardos contemplados en el ítem No 4.9 BOLARDO TIPO PORTUARIO, dicho hallazgo tuvo incidencia Fiscal y el valor del presunto daño patrimonial asciende a \$233.740.000, que corresponde al precio unitario del bolaro (\$403.000, incluido AIU) por el número de bolardos facturados 580.*

*Posteriormente en Indagación Preliminar ANT-IP-2017-00426, se efectuó un muestreo, en una sola zona (Zona de la Catedral), para estimar cuántos bolardos en realidad estaban deteriorados, en donde se estimaron que son 73 bolardos, teniendo en cuenta que el precio unitario de cada bolaro, incluido el AIU es de \$403.000, se tendría un presunto detrimento de \$29.419.000.*

*Debido a que el número de bolardos con señales de deterioro fue un estimado, dentro del actual PRF se decretó la prueba para determinar el número exacto de los bolardos tienen deterior causados por deficiencias constructivas y así poder establecer el valor del presunto detrimento.*

*...*  
*La visita de inspección se efectuó del 20 al 24 de septiembre y del 27 de septiembre al 01 de octubre de 2021. En donde se valoraron, uno a uno, los bolardos construidos con el contrato de obra 133041 del 16 de diciembre de 2013. En esta evaluación incluye prueba técnica de esclerometría, cuando la inspección visual deje dudas sobre el estado de deterioro, esta prueba estima la resistencia del concreto en el bolaro.*

*El ensayo de esclerometría o de Martillo de Schmidt, se efectuó conforme a la Norma Técnica Colombiana NTC 3692, que tiene correspondencia con la Norma ASTM C805-85.*

*El ensayo consiste en establecer el índice esclerométrico o índice de rebote, al concreto endurecido empleando un instrumento normalizado llamado esclerómetro o Martillo de Schmidt, consistente en un martillo impulsado por un resorte, en donde se mide el rebote del émbolo del instrumento, unidad denominada Índice de Rebote, esta unidad se puede*

correlacionar con la resistencia del concreto, conforme a las curvas de calibración del instrumento. Es de anotar que, a mayor Índice de Rebote, mayor es la resistencia del concreto.

...  
La prueba se efectuó con un esclerómetro Marca SJJW Serie: 01020025, cuyo rango de medida es de 10-60 MPa, con energía de impacto de 2.207±0.1 J.

Para poder individualizar los bolardos inspeccionados se efectuó sectorización por zonas; se establecieron diez (10) zonas, en donde la ubicación de los bolardos se encuentra en los anexos. A continuación, se indican los sectores y el número de bolardos que se verificaron:

Zona	Nombre del Sector	Número Bolardos
01	Plaza Cisneros (Entre Hotel Cosmos y Estación)	90
02	Cuadra Estación ESSO, SUBWAY, Comfandi	43
03	Separador al frente de Estación ESSO	79
04	Cuadra Bancos Bogotá, Occidente, Porvenir	39
05	Cuadra Palacio de Justicia	41
06	Cuadra Funeraria La Paz, Panadería "La Catedral"	21
07	Cuadra TRADE CENTER	21
08	Zona de la Catedral	155
09	Cuadra de la DIAN Movistar	53
10	Cuadra al frente Banco Popular	14
TOTAL		556

El registro fotográfico de cada uno de los bolardos fue consignado en el Informe Técnico radicado No. 2021IE0088855 del 19 de octubre de 2021, “La documentación fílmica y los registros fotográficos están contenidos en los anexos del este Informe. A continuación, se tienen las fichas de cada uno de los bolardos verificados en la visita, en donde se determina si el mismo está deterioro y si este deterior es causado por deficiencias constructivas.”

[D:\2024\GRUPO DE REGALIAS 2024\PRF\PRF-2019-00072 - MPR\IC PRINCIPAL\20211019 INFORME TECNICO 00072 2021IE0088855.pdf](#)

RESUMEN DE LA INSPECCIÓN

Zona	Nombre del Sector	Número Bolardos	Bolardos contabilizados presunto daño
01	Plaza Cisneros (Entre Hotel Cosmos y Estación)	90	46
02	Cuadra Estación ESSO, SUBWAY, Comfandi	43	20
03	Separador al frente de Estación ESSO	79	22
04	Cuadra Bancos Bogotá, Occidente, Porvenir	39	17
05	Cuadra Palacio de Justicia	41	12
06	Cuadra Funeraria La Paz, Panadería "La Catedral"	21	5
07	Cuadra TRADE CENTER	21	11
08	Zona de la Catedral	155	42
09	Cuadra de la DIAN Movistar	53	31
10	Cuadra al frente Banco Popular	14	12
TOTAL		556	218

CONCLUSIONES

- Conforme a la inspección física efectuada, el total de bolardos evidenciados fue 556, cuando el número de bolardos facturados y cobrados fue 580. Lo anterior indica que hubo 24 bolardos que fueron pagados y no fueron construidos.



Teniendo en cuenta que el valor de cada bolardo es de \$403.000, el valor de estos 24 bolardos ascendería a \$9.672.000.

- De los 556 bolardos inspeccionados, 218 tienen señales de deterioro, que probablemente no fue causado por choques de vehículos. El valor de estos 218 bolardos asciende a \$87.854.000.
- Teniendo en cuenta los dos puntos anteriores el valor del presunto detrimento patrimonial sería igual a \$97.526.000 (Noventa y siete millones quinientos veintiséis mil pesos), que corresponden a los bolardos no encontrados más los bolardos deteriorados por deficiencias constructivas.

Anexos: 11 planos que indican la localización de los bolardos por cada una de las 10 zonas y una localización general  
01 DVD que contiene este archivo en Word y PDF, registro fotográfico, registro fílmico, de la inspección realizada”

El Informe Técnico rendido el 19 de octubre de 2021, trasladado por tres (3) días, desde el 14 hasta el 16 de diciembre de 2021, Traslado No. 104-2021.

De conformidad a la información financiera y contractual de la Obra, fueron contruidos y pagados 580 bolardos, fueron 556 bolardos inspeccionados por el profesional experto, de los cuales 218 tenían señales de deterioro, que probablemente no fue causado por choques de vehículos. El valor de estos 218 bolardos asciende a \$87.854.000 y 24 bolardos que fueron pagados y no fueron contruidos. Teniendo en cuenta que el valor de cada bolardo es de \$403.000, el valor de estos 24 bolardos ascendería a \$9.672.000; se determina que el daño patrimonial al Estado asciende a la suma de **NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS (\$97.526.000)** sin indexar.

Como resultado de las diligencias de versión libre y análisis del Informe técnico, se solicitó al Profesional experto que rindiera aclaraciones al respecto, presentando 3 documentos que las contiene los radicados No. 2024IE0064863, No. 2024IE0080441 y No. 2024IE0087496, las cuales fueron puesta en conocimiento de los presuntos en Estado.

En estas aclaraciones:

- Se reajusto el número de bolardos que presentan deterioro, pasando de 218 a 171, cuantificados en \$78.585.000.

Zona	Nombre del Sector	Número Bolardos	Bolardos contabilizados para presunto detrimento	
			Informe Técnico	Ajustado
01	Plaza Cisneros (Entre Hotel Cosmos y Estación)	90	46	38
02	Cuadra Estación ESSO, SUBWAY, Comfandi	43	20	17
03	Separador al frente de Estación ESSO	79	22	16
04	Cuadra Bancos Bogotá, Occidente, Porvenir	39	17	14
05	Cuadra Palacio de Justicia	41	12	11
06	Cuadra Funeraria La Paz, Panaderia "La Catedral"	21	5	4
07	Cuadra TRADE CENTER	21	11	8
08	Zona de la Catedral	155	42	31
09	Cuadra de la DIAN Movistar	53	31	23
10	Cuadra al frente Banco Popular	14	12	9
TOTAL		556	218	171

- Se detallo el procedimiento aplicado en la realización de la prueba técnica, entre otros asuntos.

La cuantificación final del daño patrimonial sin indexar es por valor de **SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MODEDA CORRIENTE (\$78.585.000)**, que corresponde a:

24	Bolardos no encontrados	\$9.672.000
25	Bolardos que no alcanzaron resistencia de 3000 PSI en la prueba de esclerometría	\$10.075.000
146	Bolardos que presentan descascaramiento del concreto, indicio de falencia de durabilidad	\$58.838.000

**ANALISIS DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL**

Proceden los suscritos Directivos del Colegiado a realizar un análisis del acervo probatorio que obra en el expediente, para decidir de conformidad con el artículo 46 de la Ley 610 de 2000 y además establecer si de conformidad con los artículos 118 y 119 de la Ley 1474 de 2011, el hecho que se investiga y que dio origen al proceso, causado por conductas cuyo grado de culpabilidad es doloso o gravemente culposo, atribuibles a personas que realicen gestión fiscal o que hayan concurrido o contribuido al acaecimiento del hecho, en cuanto a los sujetos procesales:

1. **CONSTRUCTORA CRP**, identificada con el Nit. No. 890.313.269, representada legalmente por CESAR RUIZ PEREA, Contratista en el Contrato de Obra No. 133041 del 16 de diciembre de 2013.
2. **BARTOLO VALENCIA RAMOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.469.636 de Buenaventura, en su calidad de representante legal del Distrito de Buenaventura, ordenador del gasto, Contratante en el Contrato de Obra No. 133041 del 16 de diciembre de 2013.
3. **JULIO CESAR DIAZ CUERO**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.489.601, Secretario de Infraestructura del Distrito de Buenaventura para la época de los hechos, Supervisor del Contrato de Obra No. 133041 del 16 de diciembre de 2013.
4. **UNIÓN TEMPORAL BOULEVARD DE BUENAVENTURA**, identificada con el Nit. No. 900.748.452-1, representada legalmente por HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula No. 16.715.628, en su calidad de Interventor del Contrato de Obra No. 133041 de 2013, mediante Contrato de Interventoría No. 141226 del 11 de julio de 2014, integrada por:
  1. Diconsultoría S.A., identificada con el Nit. No. 800.003.776-3, y
  2. Carlos Alfredo Valencia Pardo S.A.S, identificado con el Nit. No. 901.420.994-6.

**De la Responsabilidad Fiscal**

En este sentido se tendrá como presupuesto los elementos que configuran la responsabilidad fiscal previstos en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000: **"Elementos de la responsabilidad fiscal.** La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos:

- Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal

- Un daño patrimonial al Estado.
- Un nexo causal entre los dos elementos anteriores”.

Por su parte el artículo 48 ibidem: **Auto de imputación de responsabilidad fiscal.** *El funcionario competente proferirá auto de imputación de responsabilidad fiscal cuando esté demostrado objetivamente el daño o detrimento al patrimonio económico del Estado y existan testimonios que ofrezcan serios motivos de credibilidad, indicios graves, documentos, peritación o cualquier medio probatorio que comprometa la responsabilidad fiscal de los implicados. El auto de imputación deberá contener:*

1. *La identificación plena de los presuntos responsables, de la entidad afectada y de la compañía aseguradora, del número de póliza y del valor asegurado.*
2. *La indicación y valoración de las pruebas practicadas.*
3. *La acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la determinación de la cuantía del daño al patrimonio del Estado.”*

Por lo anterior, se hace necesario proceder a efectuar la valoración del acervo probatorio recaudado teniendo en cuenta las reglas de la sana crítica y la persuasión racional establecida en el artículo 26 de la Ley 610 de 2000, la acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la determinación de la cuantía del daño patrimonial al Estado, de conformidad con el artículo 5 ibidem.

**Daño Patrimonial al Estado**

Se encuentra regulado por el artículo 6 de la Ley 610 de 2000: **Daño patrimonial al Estado.** *Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. **El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007”***

Los suscritos Directivos del Cuerpo Colegiado, tienen conocimiento del daño patrimonial, por el traslado de Hallazgo fiscal, denominado Antecedente No. 355 del 2016, vigencia 2012—2015, producto de la Auditoría al Sistema General de Regalías al Municipio de Buenaventura.

Como resultado de los informes técnicos emitidos por el profesional experto, se evidencio que el ítem de los bolardos, presenta irregularidades que ameritan el reproche fiscal, por:

24	Bolardos no encontrados	\$9.672.000
25	Bolardos que no alcanzaron resistencia de 3000 PSI en la prueba de esclerometría	\$10.075.000
146	Bolardos que presentan descascaramiento del concreto, indicio de falencia de durabilidad	\$58.838.000

El componente de los bolardos fue, efectivamente pagados, determinándose que el daño patrimonial al Estado asciende a la suma de **SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MODEDA CORRIENTE (\$78.585.000)** sin indexar.

**Análisis de la Conducta**

La conducta en materia de Responsabilidad Fiscal se refiere a la potestad funcional, reglamentada o contractual de un servidor público o un particular que despliegue gestión fiscal, en ejercicio de la cual o con ocasión de ella, genere o contribuya al detrimento patrimonial (Artículos 2 y 209 de la Constitución Política, artículo 3 de la Ley 610 de 2000 y artículo 3 de la Ley 1437 de 2011).

La Ley 610 de 2000, en su artículo 3 define por gestión fiscal lo siguiente: (...) *conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales (...)*

Al respecto el Consejo de Estado sobre este particular señaló: *“es el conjunto de actividades económico-jurídicas relacionadas con la adquisición, conservación, explotación, enajenación, consumo, disposición de los bienes del Estado, así como la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines de éste, y realizadas por los órganos o entidades de naturaleza jurídica pública o por personas naturales o jurídicas de carácter privado”* (Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil 848 de 31 de julio de 1996 Consejero Ponente Cesar Hoyos Salazar).

De conformidad con el artículo 5 del Decreto Ley 610 de 2000, se establece: *“Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos: - Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. - Un daño patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.”*

Por su parte, el artículo 1 de la Ley 610 de 2000, establece: *“Definición. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.”*

Significa lo anterior, que, dentro de los elementos configurativos de la responsabilidad fiscal, el hecho generador puede ser atribuido al gestor fiscal directo y/o a quien contribuya determinantemente a la generación del daño fiscal. Es decir, se trata de sujetos de quienes se predica una intervención necesaria para la producción del daño, es decir, sin cuya la participación, concurrencia, incidencia o contribución, el daño no se hubiera producido o no

se hubiera producido en la magnitud en la que se produjo.

No cabe duda de que el daño fiscal, es el que se causa en el ámbito de la gestión fiscal por el tipo de sujeto allí contemplado; como tampoco cabe duda que el fenómeno causal puede ser atribuido a uno o a varios sujetos que funcionalmente tengan actividades funcionales en la gestión fiscal afectada, en un contexto de con causalidad.

Al respecto, en sentencia C-840 de 2001, (reiterada, entre otras, en las sentencias C-619-02 y C-832-02) se expresa: “El sentido unitario de la expresión o con ocasión de ésta sólo se justifica en la medida en que los actos que la materialicen comporten una relación de conexidad próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal. Por lo tanto, en cada caso se impone examinar si la respectiva conducta guarda alguna relación para con la noción específica de **gestión fiscal**, bajo la comprensión de que ésta tiene una entidad material y jurídica propia que se desenvuelve mediante planes de acción, programas, actos de recaudo, administración, inversión, disposición y gasto, entre otros, con miras a cumplir las funciones constitucionales y legales que en sus respetivos ámbitos convocan la atención de los servidores públicos y los particulares responsables del manejo de fondos o bienes del Estado.

(...)

Consecuentemente, si el objeto del control fiscal comprende la vigilancia del manejo y administración de los bienes y recursos públicos, fuerza reconocer que a las contralorías les corresponde investigar, imputar cargos y deducir responsabilidades en cabeza de quienes en el manejo de tales haberes, o con ocasión de su gestión, causen daño al patrimonio del Estado por acción u omisión, tanto en forma dolosa como culposa. Y es que no tendría sentido un control fiscal desprovisto de los medios y mecanismos conducentes al establecimiento de responsabilidades fiscales con la subsiguiente recuperación de los montos resarcitorios. La defensa y protección del erario público así lo exige en aras de la moralidad y de la efectiva realización de las tareas públicas. Universo fiscal dentro del cual transitan como potenciales destinatarios, entre otros, los directivos y personas de las entidades que profieran decisiones determinantes de gestión fiscal, así como quienes desempeñen funciones de ordenación, control, dirección y coordinación, contratistas y particulares que causen perjuicios a los ingresos y bienes del Estado, siempre y cuando se sitúen dentro de la órbita de la gestión fiscal en razón de sus poderes y deberes fiscales.

(...)

En este orden de ideas la Corte declarará la exequibilidad de la expresión "con ocasión de ésta", contenida en el artículo 1 de la ley 610 de 2000, bajo el entendido de que los actos que la materialicen comporten una relación de conexidad próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal (negrilla original. Subraya fuera de texto).

Pero, además de establecer si los presuntos responsables son gestores fiscales es necesario analizar, si la conducta fue cometida con dolo o culpa grave; al respecto la Ley 610 de 2000, no consagró definición alguna sobre el particular, ni estableció parámetros específicos, por lo que la Contraloría General de la República se ha remitido, a las definiciones consignadas en otros estatutos como el Código Civil que en su artículo 63, distingue tres clases de culpa y dolo así: “La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

**Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo.**



*Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone al diligencia o cuidado ordinario o mediano.*

*El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.*

*Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpas se opone a la suma diligencia o cuidado.*

*El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (Negrilla extra texto).*

De conformidad con la doctrina, se actúa con culpa cuando existe un comportamiento voluntario en una actuación cuyo resultado es antijurídico. Interviene entonces, la facultad volitiva del agente y por ende se actúa conscientemente.

El hecho culposo puede generarse en la negligencia, la cual implica una falla en la atención que debe prestar el agente en sus actuaciones. El negligente deja de realizar una conducta a la cual estaba obligado, y no emplea la diligencia necesaria para evitar un resultado dañoso, en consecuencia, es un descuido de su conducta.

La imprudencia por su parte es un obrar sin aquella cautela que según la experiencia debe emplearse en la realización de ciertos actos.

La impericia consiste en la insuficiente aptitud para el ejercicio de un arte o profesión. La legislación colombiana, acogió desde el año 1887 con el Código Civil, el concepto de culpa en tres definiciones normativas que emanan del artículo 63.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.

A su vez, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha fijado un alto grado de afinidad temática ante la acción de responsabilidad fiscal y la patrimonial en las Sentencias C-046 de 1994, T-973 de 1999 y C-205 de 2002, es pertinente recordar las definiciones que sobre estos conceptos trae la Ley 678 de 2001, teniendo en cuenta el vacío de la Ley 610 de 2000, en esta materia.

*Artículo 5. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado.*

*Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:*

- 1. Obrar con desviación de poder.*
- 2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.*
- 3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración.*
- 4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.*

5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.”

“Artículo 6. Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.
2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.
3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.
4. Violar manifiesta o inexcusablemente el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal.”

Sobre quienes tienen la calidad de gestores fiscales directos como aquellos que intervienen en una relación próxima, necesaria y determinante radican el cumplimiento de obligaciones y deberes, que lo colocan en la capacidad de saber y entender la normatividad que regula sus actuaciones debiendo adecuar su conducta a las mismas con el fin de efectuar una buena administración de los recursos públicos en cumplimiento de los fines estatales. Por ende, la omisión de sus obligaciones y deberes puede incurrir en una conducta dolosa, por el contrario si a pesar de cumplir con sus obligaciones y deberes incurre en descuido o negligencia puede estar incurriendo en culpa grave.

A su vez el artículo 26 numeral 4 de la Ley 80 de 1993, establece: “4. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.”

Finalmente se advierte que de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley 1474 de 2011, en los procesos de responsabilidad fiscal en los cuales se demuestre la existencia del daño patrimonial para el Estado provenientes de sobrecostos en la contratación **u otros hechos irregulares**, responderán solidariamente el ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad contratante con el contratista y con las demás personas que concurran al hecho, hasta la recuperación del detrimento patrimonial.

En consecuencia, es antijurídico y reprochable fiscalmente aquel comportamiento contrario a derecho, en el que incurre una persona natural o jurídica, de derecho privado o público, que tiene calidad de gestor fiscal y que actúa de manera tal que ocasiona pérdidas, mermas o deterioros al patrimonio que le ha sido confiado, en forma dolosa o gravemente culposa. Además, debe existir una relación de causalidad entre el comportamiento del agente y el daño ocasionado al Erario, generándose la obligación de reparar el daño.

**Análisis de la Conducta de los Presuntos Responsables Fiscales**

En cuanto a los hechos investigados, nos encontramos frente a deficiencias constructivas y pago de bolardos no instalados, en el Contrato de Obra No. 133041 de 2013, celebrado entre el Distrito de Buenaventura y la Constructora

CRP, encontrándose como presuntos responsables fiscales, al Contratante, el Contratista, el Interventor y el Secretario de Infraestructura del Distrito de Buenaventura.

Conforme a lo expuesto conviene precisar por esta Colegiatura la gestión fiscal, conducta de los vinculados y nexo causal entre la conducta y el daño, de la siguiente manera:

**1. BARTOLO VALENCIA RAMOS Y EL NEXO CAUSAL CON EL DAÑO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 16.469.636 de Buenaventura, en su calidad de Alcalde Municipal del Distrito de Buenaventura 2012-2015.

En ejercicio de su cargo suscribió con la CONSTRUCTORA CRP el Contrato de Obra No. 133041 de 16 de diciembre de 2013 con el objeto de: *"REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO: BOULEVARD BUENAVENTURA"*.

En su condición de alcalde y representante legal de la Entidad Municipal afectada, suscribió el Contrato de obra, considerándose **gestor fiscal** del Municipio para el momento de ocurrencia de los hechos, en cumplimiento de funciones como Alcalde Municipal y finalidades de la contratación estatal, tenía a su cargo la inmediata la dirección y responsabilidad de hacer cumplir las normas de contratación, las cláusulas del contractuales y garantizar una eficiente y eficaz ejecución del recurso estatal, destinados para el cumplimiento de los fines estatales.

De acuerdo a lo establecido la Constitución Política de Colombia, artículo 305, entre las funciones se encontraban la de cumplir las leyes, normas, políticas, procedimientos, dentro de las cuales se encuentra el régimen de contratación pública y los convenios suscritos.

De igual manera, sus actuaciones como servidor público en la contratación estatal estaban sujetas al cumplimiento de los principios, deberes y responsabilidades consagrados en la Ley 80 de 1993:

***"Artículo 3. De los Fines de la Contratación Estatal.** Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.*

***Artículo 14. De los Medios que pueden Utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual.** Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:*

- 1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato (...)*

***Artículo 23. De los Principios en las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales.** Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo*

**Artículo 26. Del Principio de Responsabilidad.** *En virtud de este principio:*

1. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectado por la ejecución del contrato.
2. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ella (...)
4. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.

**Artículo 51. De la Responsabilidad de los Servidores Públicos.** *El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley.*

Suscribió también el Contrato No. 141226 del 11 de julio de 2014, de Interventoría del Contrato de Obra No. 133041 de 2013, en lo que respecta la Ley 1474 de 2001, en su artículo 84, parágrafo 1, establece que constituye falta gravísima no exigir los supervisores e interventores la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción.

Como alcalde tenía bajo su responsabilidad la dirección de la acción administrativa del Distrito Especial de Buenaventura–Valle del Cauca y el ejercicio de control jerárquico y la tutela sobre las actividades de supervisión sobre el Contrato objeto de reproche en el presente Proceso de Responsabilidad Fiscal.

Acorde a lo expuesto, BARTOLO VALENCIA RAMOS, le competía, en virtud de las disposiciones legales como representante de la Entidad contratante y ordenador del gasto, ejercer actividades jurídicas y económicas de planeación, ejecución, seguimiento y liquidación del proceso contractual.

Encuentra el Despacho con las omisiones descritas anteriormente, que BARTOLO VALENCIA RAMOS no actuó en el caso bajo estudio con el cuidado que ni siquiera una persona negligente o de poca prudencia ocuparía en un negocio propio, configurándose la **culpa grave** en su actuar<sup>3</sup>.

En el caso de BARTOLO VALENCIA RAMOS se configura el **nexo causal** con la ocurrencia del daño al haber autorizado el pago de la totalidad del Contrato de Obra No. 133041 de 2013, reconociendo mayores por errores aritméticos en los precios unitarios aprobados al contratista.

En criterio de este Despacho, la conducta omisiva de BARTOLO VALENCIA RAMOS, no se compara con la que una persona regularmente emplea en el desarrollo de sus negocios propios; por el contrario inobservó las mínimas obligaciones que debía ejercer como garante de los recursos públicos de la Entidad territorial que representaba y que fueron invertidos en dicha contratación y, en tal sentido, su gestión fiscal fue antieconómica, ineficiente e ineficaz, razón

<sup>3</sup> Para efectos de determinar la culpa grave, aunque la Ley 610 de 2000 no trae definición expresa, se acude al artículo 63 del Código Civil.

por la cual, se considera que se le debe imputar responsabilidad fiscal a título de **culpa grave**, en cuantía no indexada de **SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$78.585.000)** sin indexar.

En el ejercicio del derecho de defensa se citó en varias ocasiones a **BARTOLO VALENCIA RAMOS**, para que rindiera versión libre y espontánea. Al no presentarse, ni aportar escrito alguno, este despacho procedió a designar apoderado de oficio el estudiante de la Universidad Santiago de Cali, **CARLOS ARTURO MUÑOZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1005965130, estudiante de la universidad Santiago de Cali, mediante Auto No. 278 del 20 de mayo de 2024.

**2. UNIÓN TEMPORAL BOULEVARD DE BUENAVENTURA Y EL NEXO CAUSAL CON EL DAÑO**, persona jurídica identificado con el Nit. No. 900.748.452-1, representada legalmente por **HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ**, identificado con cédula No. 16.715.628, suscribió el Contrato No. 141226 del 11 de julio de 2014, de Interventoría del Contrato de Obra No. 133041 de 2013. Integrada por **CARLOS ALFREDO VALENCIA PARDO**, identificado con el Nit. No. 901.420.994-6 y **DICONSULTORIA SAS**, identificada con el Nit. No. 900.748.452-1.

Una vez analizado el material probatorio que obra en el expediente, en especial los siguientes: Contrato de Interventoría 141226 del 11 de Julio de 2014, de conformidad con la Cláusula Quinta, Contrato de Obra No. 133041 de 2013, de conformidad con la Cláusula Novena, Informe Técnico, aclaraciones y Anexos, rendido por el Ingeniero Civil **FREDDY ELEAZAR LEMOS LUENGAS**.

Se inspeccionaron 556 bolardos, de los cuales 146 presentan deficiencias constructivas, 25 no alcanzaron la resistencia de 3000 PSI y 24 bolardos portuarios no fueron encontrados en el sitio establecido para su instalación. Por lo tanto, la Interventoría incumplió con la cláusula **NOVENA: INTERVENTORIA**. *La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y financiera de la ejecución y cumplimiento del presente contrato serán ejercidos por EL DISTRITO DE BUENAVENTURA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL, quien contratará una persona natural o jurídica que ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato la cual tendrá a su cargo entre otras funciones velar por el cumplimiento del objeto y de las obligaciones y coordinar lo atinente a la ejecución del mismo. El Interventor será responsable de autorizar los pagos y responder por los hechos y omisiones que le fueren imputables. El interventor contratado o designado por EL DISTRITO podrá impartir al CONTRATISTA las instrucciones, órdenes e indicaciones necesarias para la cabal ejecución del objeto contratado y desarrollará las demás actividades previstas en este contrato y las que se pacten en el respectivo contrato de interventoría (o en el acto de designación), copia del cual el CONTRATANTE remitirá inmediatamente al CONTRATISTA. En todo caso, el interventor responderá por el recibo a satisfacción de las obras objeto de este contrato. Las divergencias que se presenten entre EL CONTRATISTA y el interventor, serán dirimidas por EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL. El interventor no podrá exonerar a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales; tampoco podrá sin autorización escrita previa de EL CONTRATANTE ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del contrato, PARAGRAFO I: El interventor podrá autorizar modificaciones del diseño de las obras en situaciones de urgencia o*



emergencia debidamente comprobadas o cuando a juicio de éste, debidamente soportado con el estudio o informe técnico correspondiente, se requiera efectuar la modificación para garantizar o mejorar la funcionalidad, estabilidad, o durabilidad de la obra siempre que estas modificaciones no incrementen el valor y/o el plazo del contrato ni modifiquen sustancialmente los diseños iniciales , sin perjuicio de la celebración de las actas, otrosíes o contratos modificatorios a que haya lugar. El interventor rechazará todos aquellos trabajos o materiales que no reúnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en este documento. Si el CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el interventor, el CONTRATANTE podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen a EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARÁGRAFO II.- El control de los trabajos por el interventor no exonera ni disminuye la responsabilidad del CONTRATISTA, así como tampoco limitan su autoridad y dirección de la obra. PARÁGRAFO III.- El interventor rendirá al CONTRATANTE los informes que se pacten en el respectivo contrato de interventoría (o se establezcan en el acto de designación). PARÁGRAFO IV.- Toda orden o sugerencia del interventor al CONTRATISTA será escrita excepto en situaciones de urgencia en las cuales podrá darlas verbalmente, ratificándolas por escrito en los tres (5) días hábiles siguientes.

El Despacho observa el incumplimiento por parte de la interventoría, la **UNIÓN TEMPORAL BOULEVARD DE BUENAVENTURA** del Contrato de Interventoría 141226 del 11 de julio de 2014, cuyo objeto era “realizar para el distrito de Buenaventura la interventoría técnica para la rehabilitación y protección del espacio público Boulevard Buenaventura en la zona urbana del distrito de Buenaventura departamento del Valle del cauca” ya que al no haber ejercido control y supervisión al número de bolardos instalados y calidad de los mismos, participo de forma activa a la pérdida de dichos recursos.

De estas actuaciones este Despacho colige que no hubo cabal cumplimiento por parte de **UNIÓN TEMPORAL BOULEVARD DE BUENAVENTURA**, como Interventor del Contrato de Obra No. 133041, obligación que adquirió al momento de suscribir el Contrato de Interventoría No. 141226 del 11 de julio de 2014, ya que en ejercicio de esta atribución viabilizó y autorizo el reconocimiento de **SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MODEDA CORRIENTE (\$ 78.585.000)** sin indexar.

En el caso de la **UNIÓN TEMPORAL BOULEVARD DE BUENAVENTURA**, se configura el **nexo causal** con el daño al no haber cumplido cabalmente con las obligación establecida en Contrato de Interventoría No. 141226 del 11 de julio de 2014, referente a la supervisión y control del contrato suscrito en entre el **DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA-VALLE DEL CAUCA** y **CONSTRUCTORA CRP**, porque tenía a su cargo la salvaguarda de los recursos públicos, con el fin se ejecutara con eficiencia el recurso designado para el cometido estatal encomendado; pues autorizó el pago de **SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MODEDA CORRIENTE (\$78.585.000)** sin indexar, sin hacer la debida revisión y control de la calidad de los ejecutado sobre los pagos solicitados por el contratista y que autorizo reconocer.

En razón a lo anteriormente expuesto, se observa que dentro de la presente investigación reposan soportes probatorios que a la luz jurídica permiten tener certeza que la gestión fiscal desplegada por la **UNIÓN TEMPORAL BOULEVARD DE BUENAVENTURA** en el ejercicio de las funciones atribuidas al momento que al momento de suscribir el Contrato de Interventoría No. 141226 del 11 de julio de 2014, omitió cumplir cabalmente con los deberes estipulados en la Ley 1474 de 2011 en los artículos 83 y 84, al no realizar un seguimiento y control real de la ejecución de la obra, lo que se refleja cuando autorizo los pagos al contratista sin hacer la debida revisión y control de la calidad y cantidad de lo ejecutado, esta interventoría se realizó sin el acatamiento de los principios rectores consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, para la función administrativa de eficiencia, eficacia y responsabilidad, de los principios establecidos en el artículo 3 Ley 610 de 2000 y de la Ley 80 de 1993, por lo que este despacho considera que el mencionado incurrió en conductas antijurídicas, configurándose la **culpa grave** en su actuar, de la que trata el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011.

La Ley 1474 de 2011, determina la finalidad de la interventoría en los contratos:

**"Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual.** Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.  
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. (...)

**Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores.** La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obliqacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

Parágrafo 1. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así:  
No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.  
También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento."

**"Artículo 118. Determinación de la culpabilidad en los procesos de responsabilidad fiscal.** El grado de culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave.  
(...)  
Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes eventos:

*c) Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas;" (Subrayado extra texto).*

Respecto a lo manifestado en la versión libre el Despacho se sirve aclarar que el artículo 117 de la Ley 1474 de 2011 se aplica para las actuaciones del Proceso de Responsabilidad Fiscal, la Indagación preliminar como está establecida en el artículo 39 de la Ley 610 de 2000, tiene *por objeto verificar la competencia del órgano fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su afectación al patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e identificar a los servidores públicos y a los particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a él.* La figura de la Indagación Preliminar ha sido ampliamente conceptuada por la Oficina Jurídica, uno de ellos corresponde al emitido a la Gerencia Departamental Colegiada de Risaralda<sup>4</sup>.

*Esta oficina mediante concepto CGR-OJ-0040 de 2019, sobre la indagación preliminar y su finalidad, indicó: "De conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 610 de 2000, la Indagación Preliminar es un conjunto de actuaciones "pre-procesales" dirigidas a verificar la competencia del órgano fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su afectación al patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e identificar a los servidores públicos y a los particulares que hayan causado detrimento o intervenido o contribuido a él; su inicio únicamente tiene justificación cuando no existe certeza acerca de cualquiera de dichos eventos. En este orden, esta acción va dirigida a establecer la viabilidad para dar inicio al proceso de responsabilidad fiscal y así, podría afirmarse que esta actuación se contrae a acreditar los presupuestos sustanciales y procesales para dar inicio a la acción fiscal, bien sea por el trámite ordinario o el verbal. En la Ley 610 de 2000, modificada por la Ley 1474 de 2011, las indagaciones preliminares no tienen un procedimiento establecido como si lo tiene el proceso de responsabilidad fiscal, por ende, no están sujetas a procedimiento alguno, pues como su nombre lo indica se trata de adelantar las actuaciones necesarias para reunir los elementos para proceder a abrir el proceso de responsabilidad fiscal, en tal sentido se realizan las diligencias que en tal virtud correspondan. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política, en la indagación preliminar fiscal deberá garantizarse el debido proceso, en este entendido, la indagación preliminar fiscal como actuación administrativa se debe comunicar a la entidad afectada y a los presuntos autores o partícipes del daño al erario, y ordenar y practicar las pruebas que sean conducentes y pertinentes para efectos de establecer los elementos de que trata el artículo 39 de la Ley 610 de 2000". (...)*

Sobre el particular señaló la Corte Constitucional<sup>10</sup>:

*"El proceso mediante el cual se declara la responsabilidad fiscal cuenta con una sola fase, lo que contribuye a evitar dilaciones injustificadas en este tipo de actuaciones administrativas, y que el mismo se inicia formalmente sólo a partir de la expedición del auto de apertura. Por esta razón, la indagación preliminar, aun cuando puede coadyuvar a la verificación de la conducta que afecta el patrimonio público y a la identificación de su autor, en estricto sentido no hace parte integral del proceso de responsabilidad fiscal."*

<sup>10</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-382 de 23 de abril de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

Por lo tanto, las actuaciones de la Indagación Preliminar fueron incorporadas y se ordena tener como medios de pruebas, en el artículo Quinto del Auto de

<sup>4</sup> CONCEPTO 2021IE0035313 de fecha 05 de mayo de 2021

apertura No. 618 de fecha 30 de septiembre de 2019, el cual fue notificado personalmente al representante legal HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ<sup>5</sup> y quedo a disposición el Expediente para su consulta.

Como lo manifiesta el Profesional asignado, que debido al poco tiempo que conto para la inspección decretada en la Indagación Preliminar, no le fue posible inspeccionar los 580 bolardos del Contrato, sino una muestra y por ello en el Proceso de Responsabilidad Fiscal se decreta informe técnico y fue practicado, el cual fue surtió el traslado mediante Auto No. 866 de fecha 30 de noviembre de 2021<sup>6</sup>.

Referente a la solicitud de pruebas, el Despacho tiene conocimiento y quedo plasmado en el Informe Técnico<sup>7</sup>, los diseños no fueron aportados al Expediente y durante la comisión en Buenaventura (Secretaría de Infraestructura Vial y Secretaría de Planeación), no se encontraban dichas especificaciones. Situación que reprocha tanto a la Administración Distrital como a los demás actores que intervinieron en la ejecución del Contrato. En cuanto al Certificado de Calibración, la prueba practica por el Ingeniero de apoyo se acogió a los estándares y normas aplicables para verificar la resistencia del concreto con el cual fue construido<sup>8</sup>; referente al registro de los 146 bolardos portuarios, este se encuentra consignado en el INFORME TECNICO 00072\_2021IE0088855, presentado por el profesional en ingeniería civil y que fue trasladado mediante Auto No. 866 de fecha 30 de noviembre de 2021<sup>9</sup>.

Bajo estas circunstancias, el Despacho cuenta con el material probatorio suficiente para emitir la decisión de imputar responsabilidad a los actores del Contrato.

- a. En el ejercicio del derecho de defensa **CARLOS ALFREDO VALENCIA PARDO S.A.S**, identificado con el Nit. No. 901.420.994-6, miembro de la **UNIÓN TEMPORAL BOULEVARD DE BUENAVENTURA**, para que rindiera versión libre y espontanea. Al no presentarse, ni aportar escrito alguno, este Despacho procedió a designar apoderado de oficio el estudiante de la Universidad ICESI, LAURA DANIELA CASTELLANOS NIÑO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000285838, código No. A00371773, mediante Auto No. 278 del 20 de mayo de 2024.
- b. En el ejercicio del derecho de defensa se citó en varias ocasiones a **DICONSULTORIA S.A.S**, identificada con el Nit.: 900.748.452-1, para que rindiera versión libre y espontanea. A pesar que no se presentó a la diligencia, apporto escrito en el que rindió su versión libre, documento digital denominado 20240806\_VERSION LIBRE PRF 2019-00072\_DICONSULTORIA SA\_PRF-2019-00072\_2024ER0172587.

<sup>5</sup> 15/10/2019 ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL No. 145-2019, “20200211\_DEVOLUCION\_DILIGENCIAS\_NOTIFICACION\_2020IE0012894 y 20231218\_DILIGENCIAS DE NOTIFICACION PERSONAL\_2023IE0132537\_PRF-2019-00072, Trámite SIREF No. 20 y 88”  
<sup>6</sup> Visible a trámite SIREF 59  
<sup>7</sup> Página 1 del documento denominado 20211019\_INFORME TECNICO 00072\_2021IE0088855  
<sup>8</sup> El ensayo de esclerometría o de Martillo de Schmidt, se efectuó conforme a la Norma Técnica Colombiana NTC 3692, que tiene correspondencia con la Norma ASTM C805-85, tomado del documento denominado 20211019\_INFORME TECNICO 00072\_2021IE0088855  
<sup>9</sup> Visible a trámite SIREF 59

Respecto a lo manifestado en la versión libre el Despacho se sirve aclarar que el artículo 117 de la Ley 1474 de 2011 se aplica para las actuaciones del Proceso de Responsabilidad Fiscal, la Indagación preliminar como está establecida en el artículo 39 de la Ley 610 de 2000, tiene *por objeto verificar la competencia del órgano fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su afectación al patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e identificar a los servidores públicos y a los particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a él.* La figura de la Indagación Preliminar ha sido ampliamente conceptuada por la Oficina Jurídica, uno de ellos corresponde al emitido a la Gerencia Departamental Colegiada de Risaralda<sup>10</sup>.

*Esta oficina mediante concepto CGR-OJ-0040 de 2019, sobre la indagación preliminar y su finalidad, indicó: "De conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 610 de 2000, la Indagación Preliminar es un conjunto de actuaciones "pre-procesales" dirigidas a verificar la competencia del órgano fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su afectación al patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e identificar a los servidores públicos y a los particulares que hayan causado detrimento o intervenido o contribuido a él; su inicio únicamente tiene justificación cuando no existe certeza acerca de cualquiera de dichos eventos. En este orden, esta acción va dirigida a establecer la viabilidad para dar inicio al proceso de responsabilidad fiscal y así, podría afirmarse que esta actuación se contrae a acreditar los presupuestos sustanciales y procesales para dar inicio a la acción fiscal, bien sea por el trámite ordinario o el verbal. En la Ley 610 de 2000, modificada por la Ley 1474 de 2011, las indagaciones preliminares no tienen un procedimiento establecido como si lo tiene el proceso de responsabilidad fiscal, por ende, no están sujetas a procedimiento alguno, pues como su nombre lo indica se trata de adelantar las actuaciones necesarias para reunir los elementos para proceder a abrir el proceso de responsabilidad fiscal, en tal sentido se realizan las diligencias que en tal virtud correspondan. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política, en la indagación preliminar fiscal deberá garantizarse el debido proceso, en este entendido, la indagación preliminar fiscal como actuación administrativa se debe comunicar a la entidad afectada y a los presuntos autores o partícipes del daño al erario, y ordenar y practicar las pruebas que sean conducentes y pertinentes para efectos de establecer los elementos de que trata el artículo 39 de la Ley 610 de 2000".*

(...)

Sobre el particular señaló la Corte Constitucional<sup>10</sup>:

"El proceso mediante el cual se declara la responsabilidad fiscal cuenta con una sola fase, lo que contribuye a evitar dilaciones injustificadas en este tipo de actuaciones administrativas, y que el mismo se inicia formalmente sólo a partir de la expedición del auto de apertura. Por esta razón, la indagación preliminar, aun cuando puede coadyuvar a la verificación de la conducta que afecta el patrimonio público y a la identificación de su autor, en estricto sentido no hace parte integral del proceso de responsabilidad fiscal."

<sup>10</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-382 de 23 de abril de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

Por lo tanto, las actuaciones de la Indagación Preliminar fueron incorporadas y se ordena tener como medios de pruebas, en el artículo Quinto del Auto de apertura No. 618 de fecha 30 de septiembre de 2019 y del Auto No. 739 que vincula presunto y un tercero civilmente responsable y decreta pruebas de fecha 09 de noviembre de 2023, el cual fue notificado personalmente a los apoderados

<sup>10</sup> CONCEPTO 2021IE0035313 de fecha 05 de mayo de 2021



de confianza designados por el representante legal de Diconsultoria S.A.<sup>11</sup> y copia digital del Expediente y demás remitidas en la comunicaciones 2024EE0105861 y 2024EE0108962 del 07 y 12 de junio de 2024, respectivamente.

Como lo manifiesta el Profesional asignado, que debido al poco tiempo que conto para la inspección decretada en la Indagación Preliminar, no le fue posible inspeccionar los 580 bolardos del Contrato, sino una muestra y por ello en el Proceso de Responsabilidad Fiscal se decreta informe técnico y fue practicado, el cual fue surtió el traslado mediante Auto No. 866 de fecha 30 de noviembre de 2021<sup>12</sup>.

Referente a la solicitud de pruebas, el Despacho tiene conocimiento y quedo plasmado en el Informe Técnico<sup>13</sup>, los diseños no fueron aportados al Expediente y durante la comisión en Buenaventura (Secretaría de Infraestructura Vial y Secretaría de Planeación), no se encontraban dichas especificaciones. Situación que reprocha tanto a la Administración Distrital como a los demás actores que intervinieron en la ejecución del Contrato. En cuanto al Certificado de Calibración, la prueba practica por el Ingeniero de apoyo se acogió a los estándares y normas aplicables para verificar la resistencia del concreto con el cual fue construido<sup>14</sup>; referente al registro de los 146 bolardos portuarios, este se encuentra consignado en el *INFORME TECNICO 00072\_2021IE0088855*, presentado por el profesional en ingeniería civil y que fue trasladado mediante Auto No. 866 de fecha 30 de noviembre de 2021<sup>15</sup>.

Bajo estas circunstancias, el Despacho cuenta con el material probatorio suficiente para emitir la decisión de imputar responsabilidad a los actores del Contrato. El Informe Técnico rendido con sus aclaraciones, son los suficientemente explícitos y precisos en su dictamen.

Por todo lo anterior, este Despacho imputa responsabilidad fiscal a título de **culpa grave** en el actuar **UNIÓN TEMPORAL BOULEVARD DE BUENAVENTURA**, integrada por Carlos Alfredo Valencia Pardo identificado con el Nit.: 901.420.994-6, y DICONSULTORIA S.A. identificada con el Nit. No. 900.748.452-1, teniendo en cuenta que se omitieron las funciones de interventoría establecidas en Contrato de Interventoría No. 141226 del 11 de julio de 2014 y las inherentes a dicha actividad, lo que conllevo el reconocimiento y autorización de pago de 24 bolardos que no fueron instalados y 171 bolardos que presentan deficiencias constructivas en el Contrato de Obra No 133041 del 16 de diciembre de 2013.

En criterio de este Despacho, la conducta omisiva de la **UNIÓN TEMPORAL BOULEVARD DE BUENAVENTURA**, no se compadece con la que una persona

<sup>11</sup> 1a1- np em 2024EE0096507 DISCONSULTORIA PRF-2019-00072.pdf, en el archivo denominado 20240529\_DEVOLUCION DE DILIGENCIAS AUTO No 618 DEL 30\_09\_2019\_PRF-2019-00072\_2024IE0057808

<sup>12</sup> Visible a trámite SIREF 59

<sup>13</sup> Página 1 del documento denominado 20211019\_INFORME TECNICO 00072\_2021IE0088855

<sup>14</sup> El ensayo de esclerometría o de Martillo de Schmidt, se efectuó conforme a la Norma Técnica Colombiana NTC 3692, que tiene correspondencia con la Norma ASTM C805-85, tomado del documento denominado 20211019\_INFORME TECNICO 00072\_2021IE0088855

<sup>15</sup> Visible a trámite SIREF 59

regularmente emplea en el desarrollo de sus negocios propios; por el contrario inobservó sus funciones y el objeto encomendado invertidos en dicha contratación y, en tal sentido, su gestión fiscal fue antieconómica, ineficiente e ineficaz, razón por la cual, se considera que se le debe imputar responsabilidad fiscal a título de **culpa grave**, en cuantía no indexada de **SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MODEDA CORRIENTE (\$78.585.000)** sin indexar.

**3. JULIO CESAR DIAZ CUERO Y EL NEXO CAUSAL CON EL DAÑO** persona natural quien en vida fue identificado con cédula de ciudadanía número 16.489.601, Secretario de Infraestructura del Distrito de Buenaventura para la época de los hechos y en tal condición ejerció funciones de supervisión y seguimiento del Contrato de Obra No. 133061 del 16 de diciembre de 2013 y el Contrato de Interventoría No. 141226 de 2014.

Reposa en el expediente Informe Técnico, Anexos y Aclaraciones, rendido por el Ingeniero Civil FREDDY ELEAZAR LEMOS LUENGAS, del 19 de octubre de 2021 y aclaraciones del 02 y 05 de julio y 09 de agosto de 2024, donde constata este Despacho que el Contrato de Obra No. 133061 de 2013, falta de supervisión por parte de JULIO CESAR DIAZ CUERO, en la calidad y cantidad de bolardos que fueron autorizados para su respectivo pago, solicitado por el contratista, conllevaron a la pérdida de recursos por parte del Distrito Especial de Buenaventura.

Las responsabilidades establecidas para la supervisión, le determinaba el deber de verificar la documentación contractual, en especial a los reconocimientos hechos al contratista, así como practicar permanente seguimiento de las actividades realizadas.

En su condición de supervisor del Contrato de Obra No. 133041 omitió la revisión y verificación de la calidad y cantidad de bolardos del contrato, situación que contribuyó de manera determinante a que se ocasionara el daño patrimonial, más aún cuando no se presentaron objeciones ni recomendaciones durante el mismo.

Continuando con el análisis frente al hecho objeto de reproche fiscal, tenemos que a cargo de JULIO CESAR DIAZ CUERO se encontraba una responsabilidad de supervisar y exigir la ejecución eficiente del recurso y al no observarse dicha actuación de supervisión, se generó una responsabilidad frente a la ejecución del mismo, lo que permite soportar un reproche fiscal en su actuar como gestor fiscal.

El reproche fiscal se encuentra sustentado ya que en cabeza de JULIO CESAR DIAZ CUERO, quien actuó como supervisor, se encontraba la salvaguarda de los recursos públicos invertidos con el fin de que estos cumplieran el cometido estatal encomendado.

De igual manera, las actuaciones de los servidores públicos en la contratación estatal están sujetas al cumplimiento de los principios, deberes y responsabilidades consagrados en la Ley 80 de 1993 que al respecto consagra:

**"Artículo 3. De los Fines de la Contratación Estatal.** Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

**Artículo 14. De los Medios que pueden Utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual.** Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:

1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato (...)

**Artículo 23. De los Principios en las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales.** Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo

**Artículo 26. Del Principio de Responsabilidad.** En virtud de este principio:

1. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectado por la ejecución del contrato.
2. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ella (...)
4. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.

**Artículo 51. De la Responsabilidad de los Servidores Públicos.** El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley.

Así mismo la Ley 1474 de 2011, determina la finalidad de la supervisión en los contratos:

**"Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual.** Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. (...)

**Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores.** La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner

o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

Parágrafo 1. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así:  
No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.”

En este Proceso, **JULIO CESAR DIAZ CUERO**, fue notificado personalmente del auto de apertura mediante Acta de Notificación Personal en Establecimiento Carcelario, de fecha 10 de enero de 2020<sup>16</sup>, antes de su fallecimiento no rindió versión libre y espontánea; por lo tanto, se adelantó emplazamiento de herederos determinados e indeterminados, se designó como Curador Ad litem a GERARDO ADRIAN CASTAÑO CARDENAS; mediante Auto No. 125 de fecha 01 de marzo de 2024; al existir menores de edad, su representante legal designo apoderado de confianza al abogado Jaime Domingo de Ávila Hernández, notificado personalmente mediante Acta de notificación personal electrónica 2023EE0206681 del 23 de noviembre de 2023.

En el caso de **JULIO CESAR DIAZ CUERO**, se configura el **nexo causal** con el daño al no haber cumplido cabalmente con las obligaciones de supervisión y control de los Contrato de Obra No. 133041 de 2013 y el Contrato de Interventoría No. 141226 de 2014, tenía a su cargo la salvaguarda de los recursos públicos, con el fin de que estos cumplieran de forma eficiente el cometido estatal encomendado; pues al omitir la revisión y verificación de la calidad y cantidad de los bolardos del contrato dio vía libre a la erogación de dineros públicos.

En razón a lo anteriormente expuesto, se observa que dentro de la presente investigación reposan soportes probatorios que a la luz jurídica permiten tener certeza que la gestión fiscal desplegada por el presunto **JULIO CESAR DIAZ CUERO** en el ejercicio de las funciones atribuidas por la supervisión de los Contrato de Obra No. 133041 de 2013 y el Contrato de Interventoría No. 141226 de 2014, se realizó sin el acatamiento de los principios rectores consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, para la función administrativa de eficiencia, eficacia y responsabilidad, de los principios establecidos en el artículo 3 Ley 610 de 2000 y de la Ley 80 de 1993, por lo que este despacho considera que el mencionado incurrió en conductas antijurídicas, configurándose la culpa grave en su actuar, de la que trata el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011 que al tenor dispone:

**“Artículo 118. Determinación de la culpabilidad en los procesos de responsabilidad fiscal.** El grado de culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave.

(...)  
Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes eventos:

<sup>16</sup> 41\_9\_20200211\_DEVOLUCIÓN\_DILIGENCIAS\_NOTIFICACIÓN\_2020IE0012894\_(2019-00072)

Calle 23 A Norte No. 3-95 Pisos 4 a 10. Edificio San Paolo. Barrio Versalles • Código Postal 760046 • PBX 2- 6552983  
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Santiago de Cali • Valle del Cauca • República de Colombia

c) Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas;” (Subrayado extra texto).

Por todo lo anterior, este Despacho imputa responsabilidad fiscal a título de **culpa grave** en el actuar de **JULIO CESAR DIAZ CUERO**, teniendo en cuenta que se omitieron las funciones de supervisión establecidas y las inherentes a dicha actividad.

En criterio de este Despacho, la conducta omisiva de **JULIO CESAR DIAZ CUERO**, no se compadece con la que una persona regularmente emplea en el desarrollo de sus negocios propios; por el contrario inobservó las mínimas obligaciones que debía ejercer como garante de los recursos públicos de la Entidad territorial que representaba y que fueron invertidos en dicha contratación y, en tal sentido, su gestión fiscal fue antieconómica, ineficiente e ineficaz, razón por la cual, se considera que se le debe imputar responsabilidad fiscal a título de **culpa grave**, en cuantía no indexada de **SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS (\$78.585.000)** sin indexar.

**4. CONSTRUCTORA CRP Y EL NEXO CAUSAL CON EL DAÑO** persona jurídica identificado con identificada con el Nit.: 890.313.269, representante legal judicial por **GUILLERMO GUERRERO GUZMAN**, al suscribir como Contratista el Contrato de Obra No. 133041 del 16 de diciembre de 2013.

Se suscribe el Contrato de obra No. 133041 por BARTOLO VALENCIA RAMOS en su calidad de Alcalde del Distrito de Buenaventura (Para la época de los hechos) y CONSTRUCTORA CRP, en su calidad de Contratista, cuyo objeto fue: *"REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO: Boulevard Buenaventura"*.

Con el Informe Técnico<sup>17</sup>, Anexos y las tres (3) aclaraciones, rendidas por el ingeniero civil Fredy Eleazar Lemos Luengas, en el cual se precisa:

*“Dentro de la visita efectuada para efectuar el Informe Técnico del asunto, se realizó inspección de todos los bolardos construidos y adicionalmente se efectuó prueba con esclerómetro para determinar calidad de los mismos.*

*La prueba se efectuó con un esclerómetro Marca SJJW Serie: 01020025, cuyo rango de medida es de 10-60 MPa, con energía de impacto de 2.207±0.1 J.*

*Para poder individualizar los bolardos inspeccionados se efectuó sectorización por zonas; se establecieron diez (10) zonas, en donde la ubicación de los bolardos se encuentra en los anexos. A continuación, se indican los sectores y el número de bolardos que se verificaron:*

<sup>17</sup> 20211019\_INFORME TECNICO 00072\_2021IE0088855



Zona	Nombre del Sector	Número Bolardos
01	Plaza Cisneros (Entre Hotel Cosmos y Estación)	90
02	Cuadra Estación ESSO, SUBWAY, Comfandi	43
03	Separador al frente de Estación ESSO	79
04	Cuadra Bancos Bogotá, Occidente, Porvenir	39
05	Cuadra Palacio de Justicia	41
06	Cuadra Funeraria La Paz, Panadería "La Catedral"	21
07	Cuadra TRADE CENTER	21
08	Zona de la Catedral	155
09	Cuadra de la DIAN Movistar	53
10	Cuadra al frente Banco Popular	14
TOTAL		556

Cada zona está documentada mediante documento fílmico y adicionalmente, a cada bolardo se le tomó foto para verificar su estado y en caso de ser necesario se le efectuaba la prueba de esclerometría, tal como se detalló anteriormente.

La documentación fílmica y los registros fotográficos están contenidos en los anexos del este Informe.

A continuación, se tienen las fichas de cada uno de los bolardos verificados en la visita, en donde se determina si el mismo está deterioro y si este deterior es causado por deficiencias constructivas.

Zona	Nombre del Sector	Número Bolardos	Bolardos contabilizados para presunto detrimento	
			Informe Técnico	Ajustado
01	Plaza Cisneros (Entre Hotel Cosmos y Estación)	90	46	38
02	Cuadra Estación ESSO, SUBWAY, Comfandi	43	20	17
03	Separador al frente de Estación ESSO	79	22	16
04	Cuadra Bancos Bogotá, Occidente, Porvenir	39	17	14
05	Cuadra Palacio de Justicia	41	12	11
06	Cuadra Funeraria La Paz, Panadería "La Catedral"	21	5	4
07	Cuadra TRADE CENTER	21	11	8
08	Zona de la Catedral	155	42	31
09	Cuadra de la DIAN Movistar	53	31	23
10	Cuadra al frente Banco Popular	14	12	9
TOTAL		556	218	171

Fuente: 20240702\_AclaraciOn Informe TEcnico\_PRF-2019-00072\_2024IE0064863

En la aclaración del Informe se indica que se presentaría como presunto detrimento los 24 bolardos no encontrados y los 171 con deficiencias constructivas, para un total de \$78.585.000.

Cabe destacar que las deficiencias constructivas obedecen a Bolardos que no alcanzaron una resistencia, conforme a la prueba del esclerómetro o que tenían señales de deterioro por descascaramiento del concreto, lo cual evidencia de una dosificación inadecuada del concreto, que debe soportar un ambiente marino y húmedo como en Buenaventura.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> 20240725\_Aclaraciones adicionales Informe Técnico\_PRF-2019-00072\_2024IE0080441

... hay que recordar que a los contratistas de obra les atañe una responsabilidad, tanto en la calidad como en la cantidad de obra facturada, también es claro que cuando en un contrato de obra no se tienen especificaciones técnicas del ítem, prevalecen las especificaciones de general aceptación, es por lo anterior que se exige que tanto el contratista como el interventor tengan la idoneidad y experiencia necesarias para avalar y en ocasiones cuestionar, con argumentos técnicos, especificaciones contractuales, que garanticen la calidad de los trabajos. Así las cosas, la falta de especificaciones contractuales no es un argumento para no garantizar calidad de la obra.<sup>19</sup>  
(...)

- Bolardos no encontrados (Se pagaron 580 se encontraron 556)  
 $24 * \$403.000 = \$9.672.000$
- Bolardos que no alcanzaron resistencia de 3000 PSI en la prueba de esclerometría  
 $25 * \$403.000 = \$10.075.000$
- Bolardos que presentan descascaramiento del concreto, indicio de falencia en durabilidad.  
 $146 * \$403.000 = \$58.838.000$

Sector	Bolardos Evidenciados	Bolardos Ensayados Esclerometría	Bolardos no Alcanzaron Resistencia	Bolardos con señales descascaramiento
Plaza Cisneros	90	18	7	31
Esso Subway	43	9	1	16
Estación Esso	79	6	2	14
Bancos	39	7	3	11
Palacio Justicia	41	7	1	10
Funeraria	21	5	3	1
Trade Center	21	3	2	6
Catedral	155	19	3	28
DIAN	53	8	3	20
Banco Popular	14	0	0	9
TOTALES	556	82	25	146

Conforme a lo anterior se presentaría como presunto detrimento los 24 bolardos no encontrados y los 171 con deficiencias constructivas, para un total de **\$78.585.000<sup>20</sup>**

Este Despacho concluye que CONSTRUCTORA CRP, en calidad de contratista tenía el deber contractual y legal de cumplir con la obligación de ejecutar el objeto del contrato señalado en la cláusula primera, y lo pactado frente a precios y cantidades de obra.

Con su conducta el contratista, incurrió en una manifiesta violación al deber contractual estipulado expresamente en el Contrato No. 133041 del 16 de diciembre de 2013 anteriormente señalado, así como de los deberes de los contratistas consagrados en el Estatuto de la Contratación Estatal Ley 80 de 1993, que prevé como fin de la contratación estatal respecto de los particulares:

**Artículo 3. De los Fines de la Contratación Estatal.** "(...) Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones."

<sup>19</sup> 20240702\_AclaraciOn Informe TEcnico\_PRF-2019-00072\_2024IE0064863  
<sup>20</sup> 20240809\_03 Aclaración Informe Técnico\_PRF-2019-00072\_2024IE0087496

**Artículo 5.** "Para la realización de los fines de que trata el artículo 3, de esta ley, los contratistas: (...)

2. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las ordenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y en trabamientos que pudieran presentarse. (...)

4. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello.

El reproche fiscal hacia CONSTRUCTORA CRP se realiza conforme al artículo 119 de la Ley 1474 de 2011, que establece:

**Artículo 119. Solidaridad.** En los procesos de responsabilidad fiscal, acciones populares y acciones de repetición en los cuales se demuestre la existencia de daño patrimonial para el Estado proveniente de sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares, responderán solidariamente el ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad contratante con el contratista, y con las demás personas que concurran al hecho, hasta la recuperación del detrimento patrimonial.

La **CONSTRUCTORA CRP**, identificada con el Nit. No. 890.313.269, representante legal judicial por **GUILLERMO GUERRERO GUZMAN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16474329 con tarjeta profesional No. 85896 del C.S. de la J., el 09 de marzo del 2020, rinde versión libre y espontanea, en la cual manifestó:

*"En calidad de representante legal judicial de la firma Constructora CRP con NIT: 890.313.269-7, me permito presentar los siguientes argumentos de defensa y solicitudes de pruebas dentro del proceso fiscal adelantado por esta Gerencia Departamental del Valle del Cauca de la siguiente manera:*

**ARGUMENTOS DE DEFENSA**

*Tal cual como lo describe la contraloría, a través del Proceso de Responsabilidad Fiscal, se debe obtener una declaración jurídica en la cual se predica con certeza que el contratista en este caso, debe cargar con las consecuencias del daño o detrimento patrimonial, una vez demostrado.*

*La Responsabilidad Fiscal, lo que busca es que entre el daño cierto y la conducta (dolosa o culposa) se genere un nexo causal, lo que a la postre determina; la responsabilidad e igual el derecho del Estado a través de sus entes de control, obligar a resarcir tal perjuicio.*

*Al pretender asegurar que hay una culpa dolosa o culposa por parte de mí protegido, se estaría faltando a la realidad en estos casos por las siguientes situaciones **FACTICAS**,*

*La realización y cumplimiento efectivo de un contrato estatal conlleva el desarrollo actividades necesarias para su terminación ajustada a las cláusulas negócias, dentro de las cuales resaltan por su importancia: el objeto, la contraprestación, el término de ejecución y la garantía, pero además, la obra, bien o servicio, debe ser entregado funcionando y dentro de los marcos de la garantía pos-contractual.*

*Todo esto para que seas un éxito requiere de una planificación para su realización, ejecución y desarrollo, buscando ante todo el éxito del Objeto contrato y/o celebrado y obtener la satisfacción de la necesidad al poner en funcionamiento la obra contratada.*

*Igual una vez recibida la obra a satisfacción, es responsabilidad del Distrito en este caso en calidad de contratante, el cuido, mantenimiento y protección de los bienes que entran a formar parte del activo de este ente Administrativo Municipal como en este caso.*

*Llama la atención que en la visita de auditoria, se hayan determinado algunos daños y que a la fecha se presume la responsabilidad del contratista, sin tener en cuenta algunos hechos que se derivaron del proceso de planeación, aprobación, ejecución.*

*La auditoría practicada sobre los bolardos encontrados deteriorados o dañados, solo se limita a valorar las causas desde el punto de vista de la estructura de la capucha del bolardo, sin tener en cuenta, que estos bolardos son de carácter ornamentarías y no estructurales, los ocasionados por vehículo, clima, tiempo, mantenimiento y cuido debido.*

*Los otros factores externos, no tenidos en cuenta y que con el material probatorio que estarnos anexando, debe hacer claridad para que la contraloría en el uso de su deber de vigilancia y control en aras de salvaguardar el fisco Nacional, practica y que invitamos a valorar para la mejor toma de decisión así:*

**1er Argumento:**

*Diseño de obra.- La obra se llevó a cabo sin una planeación de diseños que permitieran contemplar una berma, dejando un espacio para la movilización de vehículos y una barrera para los transeúntes; en este caso no se hizo tal sardinel, sino que buscaron como objetivo, que los bolardos instalados hicieran de muro entre la zona de protección de vía y los transeúntes, zona que quedó a merced del tráfico de los vehículos, vendedores ambulantes estacionarios, descargue y cargue de mercancass, vehículos menores (bicicletas, motos, carretas y vendedores no estacionarios) ect, situaciones que se generaron y que igual no son de resorte del contratista una vez haga entrega de la obra a satisfacción.*

...

**2do. Argumento:**

*Los términos contractuales.- Estos devienen de los términos de referencia propuesta por la contratante, e igual "los bolardos" fueron una exigencia del contratante (tipo de bolardo- lugar de compra e instalación) por tanto el contratista se limitó a comprarlos en este lugar exigido, contar con la aprobación del Distrito de Buenaventura e instalarlos en los lugares según los diseños, lo que aparentemente podría hacer responsables de la calidad del bolardo al contratista, pero igual es recordar que no es estructural si no ornamental, y que sus exigencias de construcción se cumplieron.*  
*De acuerdo a los diseño, los bolardos serian para la protección peatonal, harían la veces de sardinel e igual se debió proveer que quedarían inseguros, por su mal manejo o tratos, como en este escrito lo estaríamos demostrando.*

**3er Argumento:**

*Proliferación de vendedores estacionarios.-* Las zonas del Bulevar aledañas a los bolardos, están invadidas por vendedores ambulantes estacionarios y no estacionarios, los cuales utilizan estos como soportes, y lugar para el desarrollo de sus actividades, están expuestos a golpes y utilización de otros fines diferentes a los de embellecimiento y adorno del entorno.

...

**4to Argumento:**

*Protección de bienes del estado.- Los bienes de uso público, son zonas que para su utilización, necesitan autorización mediante acto administrativo motivado, expedidos por*

parte de Planeación Distrital y Secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana, e igual su control y vigilancia depende de la oficina de Control Fisco quién vigila la ocupación de estas zonas y procura su recuperación en caso dado de hacerlo sin las debidas autorizaciones.

Se tiene que cuando los bienes de uso público, sean puestos en manos de particulares, no puede ser por **"cualquier razón"**, como lo contempla el numeral 3° del artículo 6° de la Ley 768 de 2002, sino únicamente en virtud de autorización de autoridad competente en la forma establecida en la ley; es decir, desde el punto de vista jurídico los bienes de uso público de la Nación, no pueden ser ocupados por los particulares legítimamente conforme a la Constitución, sino cuando se les hubiere otorgado licencia, concesión o permiso de ocupación temporal.

ARGUMENTOS JURIDICOS

Además de las mencionadas en este escrito encaminadas a las obligaciones de los servidores públicos en el manejo de los activos del estado y en particular de los bienes de usos públicos, trataré de exponer los siguientes argumentos:

De la culpa indilgada al contratista por parte de la Contraloría.- La supuesta omisión, negligencia o imprudencia alegada por este ente de control, bajo los argumentos demostrados de orden factico y jurídicos, demuestra la inexistencia de una responsabilidad a cargo de mi prohijado, toda vez que los daños en hallazgos responden a las exigencias del Distrito de comporta de bolardos ornamentales y no berma estructural, al debido cuidado y manejo del proyecto "pruebas allegadas en el registro fotográfico". A lo anterior se suman las condiciones en que se encuentran la zonas de aguas (fuentes, luminarias y equipo hidráulico) los que están por fuera del servicio, lo que inclusive podría generar otro hallazgo que comprometería a las partes.

Cree el contratista en calidad de presunto responsable fiscal, que no le es atribuible a su empresa este daño patrimonial, por el contrario si nos ajustamos al ordenamiento jurídico Colombiano, Ley 610 de 2000 artículo 6°, la lesión de este patrimonio público, representado en el menoscabo, perjuicio, detrimento, pérdida o uso indebido o deterioro por negligencia, le recae al contratante (Administración Distrital de Buenaventura a través de sus dependencias — Secretaria de Transito, Secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana,

Oficina de Control Físico y Planeación Distrital) quienes diseñaron bolardos ornamentales y no estructurales, al debido cuidado de los activos de la administración Distrital (Control de tránsito y movilidad) (préstamo de uso de las instalaciones para eventos de todo tipo) (omisión en la proliferación de ventas estacionarias una vez se hizo entrega de la obra) (falta de mantenimiento) ect.

La Culpa grave, según los tratadistas del derecho, la han catalogado también por su expresión latina en culpa lata, cual es el grado más amplio de negligencia o de falta de diligencia en el cumplimiento de las obligaciones; tarta pues, de una zona limítrofe entre la culpa lata y el dolo, y en la que el obligado incumplidor puede calificarse de deudor infractor.

Calificar la actuación del contratista en este caso como dolosa, lo que se está aseverando es que omite las precauciones más elementales, dejando de prever lo que la mayoría de las personas tendrían previsto, pero en este caso probatoriamente estamos demostrando que la negligencia o falta de diligencia está en manos de la Administración Distrital de Buenaventura por las siguientes causas:



- Problemas de diseño del proyecto materia de investigación en su planeación y posterior oportunidad de ajustes en la etapa de ejecución contractual (construcción de un separador de la vía como elemento constructivo - sardinell), hechos que debieron prever y no exigir unos bolardos ornamentales.
- Negligencia en la falta de mantenimiento.
- Falta de control en la proliferación de vendedores estacionarios una vez se entregó el proyecto.
- Falta de control en la movilización de vehículos en la zona.
- Control de autorización y retorno de activos, en el manejo de las zonas públicas (zona de protección de vía- plazoleta).

La Corte Constitucional ha dicho: **Cuando el daño fiscal sea consecuencia de la conducta de una persona que tenga la titularidad jurídica para manejar los fondos o bienes del Estado materia del detrimento, procederá la apertura del correspondiente proceso de responsabilidad fiscal, sea que su intervención haya sido directa o a guisa de contribución .....**

**Advirtiendo que esa especial responsabilidad está referida exclusivamente a los fondos o bienes públicos que hallándose bajo el radio de acción del titular de la gestión fiscal, sufran detrimento en la forma y condiciones prescritos por la ley.**

Recordar, o traer a colación nuevamente el artículo 6 de la Ley 610 del 2000 que dice:

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos

**Constitución política de Colombia.- Artículo 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.**

En este sentido, considera la Constructora CRP que a este proceso amerita un giro o vinculación de otras personas, buscamos que la contraloría verifique las anomalías producto de negligencias y omisiones de servidores públicos como presuntos responsables fiscales; retrotraer que el control fiscal es integral y dicha integralidad implica que su finalidad última sea la efectiva protección del patrimonio público, sin importar quienes sean responsables.

A los servidores públicos les asiste el imperativo deber de salvaguardar, custodiar, los recursos y bienes públicos que les han sido confiados en el ejercicio del desempeño de funciones, por ende la apropiación de éstos, la destinación diferente, el uso indebido, etc., implica un comportamiento reprochable.

La Ley 734 de 2002 en el artículo 34 describe los deberes de los servidores públicos, entre ellos, los contenidos en los numerales 21, 24 y 25 los cuales prescriben:

"21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le ha sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados."

La Corte a dicho: Cabe señalar que la Ley 42 de 1993, a diferencia de lo que sucede con la Ley 610 de 2000, no consagra una definición de gestión fiscal; empero nada impide a la sala acudir al concepto que sobre el tema trae la referida Ley 610 "Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías". El artículo 3° de dicha Ley prevé: "...

". De la definición transcrita deduce la Sala que el sujeto pasivo en el proceso de responsabilidad fiscal son los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, cuando al realizar la gestión fiscal, a través de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas no han dado una adecuada planeación,

conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los mismos,.....

Considera la parte investigada Constructora CRP, que en este caso no se configuran los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal, por cuanto que los daños patrimoniales obedecen más a negligencia, sumo cuidado y cumplimiento del deber de los empleados de la Administración Distrital, que han permitido encausar los daños por agentes externos, sin dejar de recalcar que estos bolardos ornamentales con apariencia Bita de amarre portuaria, no son estructurales.

Por lo tanto, solicitamos a la contraloría actuar con criterio selectivo frente a los servidores públicos, identificando puntualmente a quienes hay que ejercerle el control fiscal in sólido, tanto desde el punto de vista de los actos a examinar, la participación de los servidores públicos vinculados al respectivo ente.

Solicitud de pruebas para que sean apreciadas como pruebas solicito las siguientes:

1. Se tengan como pruebas los registros fotográficos allegados.
2. Se practique una inspección judicial para determinar el manejo del tránsito en el sector y la proliferación de ventas ambulantes.
3. Se oficie a secretaria de gobierno Distrital de Buenaventura para allegue copia de los actos administrativos que concedieron permisos temporales para la ocupación de estos bienes públicos, así mismo las actas de recibido a satisfacción.
4. Se oficie a Control físico, para que allegue copia del mapeo de recuperación de las zonas de protección de vías, andenes en el sector del Bulevar.
5. Se oficie a Planeación Distrital, para que allegue copia de todos los permisos (actos administrativos con sus actas de entrega y recibidos) surtidos para ocupación de la zona del bulevar — plazoletas. "

El Despacho se sirve aclarar al presunto que el hecho objeto de investigación y por el cual se está imputando responsabilidad en su calidad de contratista, obedece a que se detecto que las deficiencias encontradas en los bolardos inspeccionados se originan por el incumplimiento de la calidad esperada del ítem No. 4.9 BOLARDOS TIPO PORTUARIO, que conlleva a un deterioro prematuro de estos. Si bien, la obra fue recibida a satisfacción<sup>21</sup> incluidos los 580 bolardos, como resultado de los informes presentados por los profesionales en ingeniería civil adscritos a este ente de Control, coinciden en que los bolardos recibidos y pagados, presentan deficiencias constructivas en 171 y no fueron instalados 24; los bolardos inspeccionados fueron documentados y ubicados en plano por el Profesional, aclarando que los bolardos que presentaban desprendimiento por otros aspectos (accidentes de tránsito, vandalismo, entre otros) no fueron contabilizados en el Informe. Por ende, los argumentos esbozados por el Presunto no desvirtúan lo evidenciado, por el contrario, el profesional asignado en el informe y las aclaraciones presentadas, informa que la prueba del esclerómetro fue la aplicada para evaluar la resistencia del concreto y explica el desarrollo de la misma; referente a los factores como vendedores ambulantes, condiciones climáticas, parqueo y tránsito de vehículos civiles y militares, instalación de tarimas, y uso de la ciudadanía<sup>22</sup>, el profesional manifiesta que El hecho generador del presunto detrimento dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal está relacionado con las deficiencias constructivas, por tanto, solo se tomaron en cuenta los bolardos que no alcanzaron la resistencia de 3000 PSI y los que presentaban señales de descascaramiento del concreto que indican problemas de durabilidad los cuales son

<sup>21</sup> 20. Acta de recibo y pago final Obra Boulevard 19-11-2015.pdf

<sup>22</sup> Numeral 3 del documento denominado 20240809\_03 Aclaración Informe Técnico\_PRF-2019-00072\_2024IE0087496

Calle 23 A Norte No. 3-95 Pisos 4 a 10. Edificio San Paolo. Barrio Versalles • Código Postal 760046 • PBX 2- 6552983  
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Santiago de Cali • Valle del Cauca • República de Colombia

atribuibles a la mezcla de concreto. Cabe destacar que la condición climática es un factor importante a la hora del diseño de mezcla de concreto, en donde para condiciones extremas de temperatura, humedad y salinidad se usa cemento tipo 2 y en algunos casos aditivos. Frente a tener en cuenta los puntos de Parqueo y lavado de motocicletas, parqueo y tránsito de vehículos artesanales de vendedores, entre otros, el Profesional reitera que no se tuvo en cuenta los bolardos que no alcanzaron la resistencia de 3000 PSI y los que presentaban problemas de durabilidad. Cabe destacar que los 146 bolardos que presentan problemas de durabilidad, estos están relacionados con la exposición climática, resaltando que esta exposición no es un argumento para no contabilizar el bolido como deficiencia constructiva, en virtud a que esta durabilidad se alcanza con un adecuado diseño de mezcla, tal como se mencionó en el punto anterior.<sup>23</sup>

En el caso de **CONSTRUCTORA CRP**, se configura el **nexo causal** con el daño al no haber cumplido cabalmente con estipulado en el Contrato No 133041, referente a su deber contractual y legal de cumplir con lo pactado frente a las calidades y cantidades de bolardos señalados en el contrato y percibir la totalidad de los recursos pactados; pues con su conducta omisiva al contravenir los términos contractuales así como las obligaciones legales establecidas tanto en el contrato como las establecidas en el Estatuto de Contratación Estatal Ley 80 de 1993 mencionadas, y por haber incurrido en una conducta ajena a las finalidades del servicio del Estado que dio lugar al detrimento del erario, por incumplimiento en la ejecución de la obra.

En razón a lo anteriormente expuesto, se observa que dentro de la presente investigación reposan soportes probatorios que a la luz jurídica permiten tener certeza de el pago de la totalidad del Contrato de Obra No. 133041 de 2013, reconociendo mayores valores por errores aritméticos en los precios unitarios aprobados al contratista y con las actuaciones desplegadas por el presunto **CONSTRUCTORA CRP**, se configura la culpa grave en su actuar, de la que trata el artículo 119 de la Ley 1474 de 2011 que al tenor dispone:

*“Artículo 119. Solidaridad. En los procesos de responsabilidad fiscal, acciones populares y acciones de repetición en los cuales se demuestre la existencia de daño patrimonial para el Estado proveniente de sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares, responderán solidariamente el ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad contratante con el contratista, y con las demás personas que concurran al hecho, hasta la recuperación del detrimento patrimonial”*

Por todo lo anterior, este Despacho imputa responsabilidad fiscal a título de **culpa grave** en el actuar a **CONSTRUCTORA CRP**, teniendo en cuenta que se incumplió en la entrega de 24 bolardos y 171 presentan deficiencias constructivas al contratista, en el Contrato de Obra 133041, lo coadyuvo a que se configurara una pérdida de recursos por parte del Distrito Especial de Buenaventura.

En criterio de este Despacho, la conducta omisiva de **CONSTRUCTORA CRP**, no se compadece con la que una persona regularmente emplea en el desarrollo de sus negocios propios, razón por la cual se enmarca claramente dentro de la definición legal de **culpa grave** y, en tal sentido, su gestión fiscal fue

<sup>23</sup> Numeral 3 del documento denominado 20240809\_03 Aclaración Informe Técnico\_PRF-2019-00072\_2024IE0087496

antieconómica, ineficiente e ineficaz, razón por la cual, se considera que se le debe imputar responsabilidad fiscal a título de **culpa grave**, en cuantía no indexada de **SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$78.585.000)** sin indexar.

**DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE**

De conformidad con lo establecido por el artículo 44 de la Ley 610 del 15 de agosto de 2000, se vinculó a las siguientes Compañías Aseguradoras:

Auto No. 618 del 30 de septiembre de 2019, se vincula:

1. **COMPAÑÍA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.** Nit.: 860.514.654-6, Póliza de Cumplimiento de Entidades Estatales No. 430-47-994000022361, amparos: *"Cumplimiento desde el 16 de enero de 2014 hasta el 22 de junio de 2015, Valor asegurado. \$ 976.276.819,30; Anticipo desde el 16 de enero de 2014 hasta el 22 de junio de 2015, Valor asegurado. \$1.952.553.638,60 y Estabilidad y calidad de la obra desde el 16 de enero de 2014, hasta el 16 de enero de 2019 Valor asegurado \$ 1.952.553.638,60. Con asegurado y/o beneficiario el Distrito de Buenaventura"*. Comunicación de vinculación mediante oficio No. 2019EE0124868 del 02 de octubre de 2019.
2. **COMPAÑÍA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A.**, identificada con el Nit.: 860.002.400-2, cuyo tomador, afianzado y asegurado es el MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, por valor asegurado de \$ 100.000.000, amparo Cobertura Global de Manejo. Comunicación de vinculación mediante oficio No. 2019EE0124853 del 02 de octubre de 2019.

POLIZA No.	EXPEDICION	RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIA	LIMITE ASEGURADO
3000010	25/01/2013	SEGURO MANEJO	23/01/2014 – 23/01/01/2024	\$100.000.000
931653	08/01/2014	POLIZA SECTOR OFICIAL:	23/01/2014 – 23/01/2015	
3000010 - Renovación	27/01/2015	Cobertura de manejo oficial, delitos contra la administración pública, fallos con responsabilidad fiscal	23/01/2015 – 23/01/2016	

En Auto No. 739 del 09 de noviembre de 2023, se vincula a:

3. **COMPAÑÍA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A.**, identificada con el Nit.: 860.002.400-2, Seguro manejo Póliza Global sector Oficial No. 3000003 renovación expedida el 29 de octubre de 2013, con vigencia desde el 24 de octubre de 2013 hasta el 24 de octubre de 2014, cuyo tomador, afianzado y asegurado es el (1) JULIO CESAR DIAZ CUERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.489.601, Secretario de Infraestructura del Distrito de Buenaventura para la época de los hechos y (2) BARTOLO VALENCIA

RAMOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.469.636 de Buenaventura, en su calidad de Alcalde Municipal, por valor asegurado de \$100.000.000. Mediante comunicación 2023EE0212713 del 30 de noviembre de 2023, se da respuesta a la solicitud de copia del apoderado de confianza de la Compañía Aseguradora Gustavo Alberto Herrera Ávila.

Por la cobertura del amparo de calidad y estabilidad de la obra de la póliza de cumplimiento, expedición y renovación, vigentes para la época de ocurrencia de los hechos, que amparan el Contrato de Obra No. 133041 del 16 de diciembre de 2013, sobre el que recae el proceso, es procedente su permanencia en el Proceso con ocasión de esta imputación.

INSTANCIA

El Artículo 110 de la Ley 1474 de 2011 contempla: *“**Instancias.** El proceso de responsabilidad será de única instancia cuando la cuantía del presunto daño patrimonial estimado en el auto de apertura e imputación o de imputación de responsabilidad fiscal, según el caso, sea igual o inferior a la menor cuantía para contratación de la respectiva entidad afectada con los hechos y será de doble instancia cuando supere la suma señalada”*. Negrillas y subrayas fuera de texto. por lo que se hace necesario determinar la menor cuantía de contratación de la entidad aquí afectada.

Para el efecto, obra en el folio 5 del expediente<sup>24</sup>, la certificación expedida por el Distrito Especial de Buenaventura, establecida en la Resolución del 14 de febrero de 2015, en la que se indica que para el año 2015 la menor cuantía para contratar por parte del Distrito Especial de Buenaventura estaba fijada en \$ 418.827.500. Por lo anterior, considerando que la cuantía sin indexar del daño patrimonial causado al Distrito Especial de Buenaventura asciende a la suma de **SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS (\$78.585.000)**, es inferior al monto de la menor cuantía para contratar de la entidad afectada, este Despacho dispondrá en la parte resolutive de esta providencia que el presente proceso ordinario de responsabilidad fiscal se surta por el trámite de Única Instancia.

En mérito de lo anteriormente expuesto, **los Directivos Colegiados de la Gerencia Departamental del Valle del Cauca de la Contraloría General de la República,**

RESUELVEN

**PRIMERO: IMPUTAR RESPONSABILIDAD FISCAL** de forma solidaria a título de culpa grave en el Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal **PRF-2019-00072**, que se adelanta con ocasión de daño patrimonial causado a los intereses patrimoniales del DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, por la suma no indexada de **SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS (\$78.585.000)**, a las siguientes personas:

- 1. CONSTRUCTORA CRP**, identificada con el Nit. No. 890.313.269, representada legalmente por Cesar Ruiz Perea, Contratista en el Contrato de Obra No. 133041 del 16 de diciembre de 2013.

<sup>24</sup> Trámite SIREF Antecedente AN-80763-2017-29589



2. **BARTOLO VALENCIA RAMOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.469.636 de Buenaventura, representante legal del Distrito de Buenaventura, para la época de los hechos, ordenador del gasto, Contratante en el Contrato de Obra No. 133041 del 16 de diciembre de 2013.
3. **JULIO CESAR DIAZ CUERO**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.489.601, Secretario de Infraestructura del Distrito de Buenaventura para la época de los hechos, Supervisor del Contrato de Obra No. 133041 del 16 de diciembre de 2013.
4. **UNIÓN TEMPORAL BOULEVARD DE BUENAVENTURA**, identificada con el Nit. No. 900.748.452-1, representada legalmente por HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula No. 16.715.628, Interventor mediante Contrato de Interventoría No. 141226 del 11 de julio de 2014, del Contrato de Obra No. 133041 de 2013, integrada por:
- a. Diconsultoría S.A., identificada con el Nit. No. 800.003.776-3, y
  - b. Carlos Alfredo Valencia Pardo S.A.S, identificado con el Nit. No. 901.420.994-6

**SEGUNDO: MANTENER** en calidad de tercero civilmente responsable a las compañías aseguradoras:

1. **COMPAÑÍA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.** Nit.: 860.514.654-6, Póliza de Cumplimiento de Entidades Estatales No. 430-47-994000022361, amparos: "Cumplimiento desde el 16 de enero de 2014 hasta el 22 de junio de 2015, Valor asegurado. \$ 976.276.819,30; Anticipo desde el 16 de enero de 2014 hasta el 22 de junio de 2015, Valor asegurado. \$1.952.553.638,60 y Estabilidad y calidad de la obra desde el 16 de enero de 2014, hasta el 16 de enero de 2019 Valor asegurado \$ 1.952.553.638,60. Con asegurado y/o beneficiario el Distrito de Buenaventura". Comunicación de vinculación mediante oficio No. 2019EE0124868 del 02 de octubre de 2019.
2. **COMPAÑÍA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A.**, identificada con el Nit.: 860.002.400-2, cuyo tomador, afianzado y asegurado es el MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, por valor asegurado de \$ 100.000.000, amparo Cobertura Global de Manejo. Comunicación de vinculación mediante oficio No. 2019EE0124853 del 02 de octubre de 2019:

POLIZA No.	EXPEDICION	RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIA	LIMTE ASEGURADO
3000010	25/01/2013	SEGURO MANEJO POLIZA SECTOR OFICIAL: Cobertura de manejo oficial, delitos contra la administración pública, fallos con responsabilidad fiscal	23/01/2014 – 23/01/01/2024	\$100.000.000
931653	08/01/2014		23/01/2014 – 23/01/2015	
3000010 - Renovación	27/01/2015		23/01/2015 – 23/01/2016	

3. **COMPAÑÍA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A.**, identificada con el Nit.: 860.002.400-2, Seguro manejo Póliza Global sector Oficial No. 3000003 renovación expedida el 29 de octubre de 2013, con vigencia desde el 24 de octubre de 2013 hasta el 24 de octubre de 2014, cuyo tomador, afianzado y asegurado es el **(1) JULIO CESAR DIAZ CUERO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.489.601, Secretario de Infraestructura del Distrito de Buenaventura para la época de los hechos y **(2) BARTOLO VALENCIA RAMOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.469.636 de

 <b>CONTRALORÍA</b> General de la República	<b>GERENCIA DEPARTAMENTAL</b> <b>COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA</b>
	<b>FECHA: 29 DE AGOSTO DE 2024</b>
	<b>Página 72 de 73</b>
<b>AUTO No. 515 DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL PRF-2019-00072</b>	

Buenaventura, en su calidad de Alcalde Municipal, por valor asegurado de \$100.000.000. Mediante comunicación No. 2023EE0212713 de fecha 30 de noviembre de 2023, se da respuesta a la solicitud de copia del apoderado de confianza de la Compañía Aseguradora Gustavo Alberto Herrera Ávila.

**TERCERO: TRAMITAR** en única instancia el Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. PRF-2019-00072, conforme a la parte considerativa de esta providencia.

**CUARTO: NOTIFICAR PERSONALMENTE** la presente providencia de conformidad con los artículos 106 de la Ley 1474 de 2011 y en los términos de los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, a través de la Secretaría Común de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca a:

- 1. BARTOLO VALENCIA RAMOS**, mediante apoderado de oficio el estudiante de la Universidad Santiago de Cali, **CARLOS ARTURO MUÑOZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 1005965130, al correo electrónico [carlos.munoz10@usc.edu.co](mailto:carlos.munoz10@usc.edu.co)
- 2. JULIO CESAR DIAZ CUERO**, causante fallecido a través de sus **(a) Herederos determinados**, representados por apoderado de confianza, **JAIME DOMINGO DE ÁVILA HERNÁNDEZ**, al correo electrónico [doctordeavila@gmail.com](mailto:doctordeavila@gmail.com), **(b) Herederos Indeterminados** por medio del **CURADOR AD LITEM**, **GERARDO ADRIAN CASTAÑO CARDENAS**, correo electrónico [gadrian.casta@gmail.com](mailto:gadrian.casta@gmail.com)
- 3. CONSTRUCTORA CRP SAS**, por medio del correo electrónico [juridico@ruiz.com.co](mailto:juridico@ruiz.com.co) y [guillermoguerrero@hotmail.com](mailto:guillermoguerrero@hotmail.com)
- 4. UNION TEMPORAL BOULEVARD DE BUENAVENTURA**, representante legal **HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ**, identificado con cédula No. 16.715.628, por medio del apoderado de oficio, **MIGUEL ANGEL CARABALI MARQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1107529855 al correo electrónico [miguel.carabali1@u.icesi.edu.co](mailto:miguel.carabali1@u.icesi.edu.co)
- 5. DICONSULTORIA S.A.S**, representante legal **HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ**, por medio de sus apoderados de confianza **JULIAN DAVID SUAREZ GIL** y **MARITZA DEL SOCORRO QUINTERO JIMENEZ** al correo electrónico [jsuarez@qyqlegal.co](mailto:jsuarez@qyqlegal.co) y [mquintero@qyqlegal.co](mailto:mquintero@qyqlegal.co)
- 6. CARLOS ALFREDO VALENCIA PARDO S.A.**, por medio de apoderado de oficio, **LAURA DANIELA CASTELLANOS NIÑO**, al correo electrónico [laura.castellanos1@u.icesi.edu.co](mailto:laura.castellanos1@u.icesi.edu.co)
- 7. COMPAÑÍA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.**, por medio del correo electrónico [notificaciones@solidaria.com.co](mailto:notificaciones@solidaria.com.co)
- 8. COMPAÑÍA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A.**, [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co)

**QUINTO: TRASLADO.** De conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 610 de 2000, surtida la notificación personal, se hace saber a cada uno de los presuntos responsables fiscales, a sus apoderados de oficio y de confianza y al apoderado del tercero civilmente responsable, que disponen de un término de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, para presentar los Argumentos de Defensa frente a la imputación efectuada, así como para solicitar y aportar las pruebas que pretendan hacer valer, los cuales habrán de ser radicados en la oficina de correspondencia de la

Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca, advirtiéndole que durante dicho término el expediente permanecerá disponible en la Secretaría Común.

**SEXTO.** Contra el presente auto no proceden recursos.

**SEPTIMO.** Por Secretaría Común, líbrense las citaciones y notificaciones de rigor para el efectivo cumplimiento de lo aquí ordenado.

**OCTAVO:** Efectuar en los aplicativos institucionales las anotaciones que correspondan a la presente decisión.

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**



**MARYORY PAREDES RUIZ**  
Contralor Provincial de Regalías  
Directivo Ponente



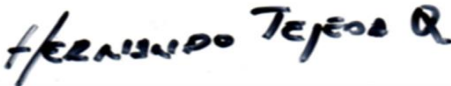
**DIANA MARCELA NAVIA QUICENO**  
Contralor Provincial de Regalías



**SANDRA PATRICIA RIVERA VELASCO**  
Contralora Provincial



**GUILLERMO ELIECER LOPEZ PERDOMO**  
Contralor Provincial



**EARLD HERNANDO TEJEDA QUINTERO**  
Gerente Departamental  
Presidente de la Colegiatura

Proyectó: LEYDI SANCHEZ SANCHEZ  
PU Grupo de Responsabilidad Fiscal

Revisó: ADRIANA FRANCO LONDOÑO  
Coordinadora Responsabilidad Fiscal

Aprobó: MARYORY PAREDES RUIZ  
Contralor Provincial – Directivo Ponente

Aprobado: Acta No. 67 del Comité Colegiado Sesión Ordinaria de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle  
Fecha: 29 de agosto de 2024